



HAL
open science

Atlas América Latina y el Caribe. 17 iniciativas de desarrollo sostenible

Olivier Dabène, Laurie Servieres

► To cite this version:

Olivier Dabène, Laurie Servieres. Atlas América Latina y el Caribe. 17 iniciativas de desarrollo sostenible. Agence française de développement, 49 p., 2024, 9782379020186. hal-04424539

HAL Id: hal-04424539

<https://sciencespo.hal.science/hal-04424539>

Submitted on 29 Jan 2024

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 4.0 International License

ATLAS

América Latina y el Caribe

17 iniciativas
de desarrollo sostenible

Olivier Dabène
Laurie Servières

ATLAS

América Latina y el Caribe

17 iniciativas
de desarrollo sostenible

Olivier Dabène
Laurie Servières



La Agence Française de Développement (AFD) implementa la política de Francia en materia de desarrollo y de solidaridad internacional. A través de sus actividades de financiamiento del sector público y de las ONG, de sus trabajos y publicaciones de investigación (Ediciones de la AFD), de su misión de capacitación en desarrollo sostenible (Campus AFD) y de concientización ciudadana en Francia, la AFD financia, acompaña y acelera las transiciones hacia un mundo más justo y resiliente.

Junto con nuestros socios, elaboramos soluciones compartidas a las cuales contribuyen las poblaciones destinatarias de los países emergentes y en desarrollo. Nuestros equipos trabajan en más de 3 250 proyectos locales en 115 países en los territorios franceses de Ultramar, así como en territorios en crisis, en beneficio de los bienes comunes como el clima, la biodiversidad, la paz, la igualdad de género, la educación o la salud. De esta manera contribuimos al compromiso de Francia y de los franceses en favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por un mundo en común

Fundado en 2007, el Observatorio político de América Latina y el Caribe (Opalc) de Sciences Po es un proyecto con vocación científica, pedagógica, documental y de eventos. Siendo el principal portal francófono sobre América Latina, contribuye a la comprensión de las evoluciones políticas de la región.

PRÓLOGO

Condensado extraordinario de culturas, de historia y de luchas sociales, América Latina y el Caribe están trazando un camino apasionante, a veces sinuoso, hacia nuevos modelos de desarrollo sostenible. La región es rica en diversidad marítima y agrícola, en recursos minerales estratégicos y cuenta con la mayor selva del planeta, la Amazonia. Todos estos son bazas y desafíos para construir e inspirar transiciones justas a escala mundial.

Isabel Allende contaba: «*la esperanza de los hombres y de las mujeres [de la región] que luchan por un mundo mejor*». Y Eduardo Galeano quería: «*hablar con América Latina, conocer sus secretos, preguntarle de qué arcillas nació, de qué amores y de qué violaciones era el fruto*». El Atlas América Latina y el Caribe también quiere sacar a la luz estas esperanzas y estas historias, todas las innovaciones que son contribuciones únicas del continente al gran debate internacional abierto desde 2015 con el Acuerdo de París sobre el clima y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. La región está especialmente a la vanguardia en las cuestiones de gobernanza y de justicia medioambientales, como lo demuestra el Acuerdo de Escazú firmado por veinticuatro países latinoamericanos en 2018 en Costa Rica. Este acuerdo resuena en un momento en que las movilizaciones ciudadanas en favor de la acción contra el calentamiento global se están multiplicando en todo el mundo.

Y en los próximos dos años las miradas del mundo se dirigirán hacia el continente sudamericano, ya que Brasil estará en el corazón de la gobernanza mundial con la presidencia del G20 en 2024 y la organización en Belém de la COP30 para el clima en 2025, diez años después de la COP21 de París. Los bancos públicos de desarrollo de América Latina y el Caribe desempeñarán allí un papel útil, en el seno del movimiento Finanzas en Común (FiCS). Son numerosos y dinámicos, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el BNDES en Brasil, el BICE en Argentina o el Bancoldex en Colombia. Formulo el deseo de que, colectivamente, consigamos construir una arquitectura financiera internacional capaz de alinear todos los flujos

financieros, públicos y privados, con los ODS.

Europa y América Latina y el Caribe comparten una larga historia y se ven confrontadas con desafíos comparables. Nuestros dos continentes han sido pilares del multilateralismo, desde la Sociedad de las Naciones (SDN) hasta la Agenda 2030. Recordemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una iniciativa de los países latinoamericanos. Nuestros dos continentes son también aquellos cuyas trayectorias están ahora más cercanas al «aterrizaje» –relativamente y parafraseando a Bruno Latour– en un mundo de desarrollo sostenible. No obstante, debemos redoblar nuestros esfuerzos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y reforzar el vínculo social.

Se podría construir un pacto solidario al servicio del desarrollo sostenible entre Europa y América Latina y el Caribe. Y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), que se ha convertido en el principal socio bilateral del continente, pretende asumir plenamente su parte en este trabajo. En particular, queremos participar en la renovación de la perspectiva aplicada a esta región poniendo de relieve las dinámicas positivas impulsadas por la sociedad civil, los actores gubernamentales, el sector privado y el sistema financiero.

La fuerza pedagógica de este Atlas se basa en la colaboración entre la AFD, el Observatorio Político de América Latina y el Caribe de Sciences Po París (OPALC) y estudiantes del campus latinoamericano de Poitiers (Sciences Po París). A través del prisma de los ODS, los autores aportan una visión dinámica y contemporánea de la región. Gracias a la seriedad del trabajo cartográfico y del análisis de los datos realizados se consigue dar una visión muy afinada de los desafíos y las oportunidades del continente. Quisiera dar las gracias a todo el equipo del OPALC, a su director Olivier Dabène, a sus colegas profesores-investigadores y a los estudiantes. También quiero expresar mi gratitud a los agentes de la AFD por este magnífico proyecto. Su pasión hace que esta obra sea reveladora y dinámica, portadora de esperanza para la región, para sus vínculos con Europa y, así, para el mundo entero

RÉMY RIOUX

DIRECTOR GENERAL
DE LA AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN..... p.6



Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

..... p.10



Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

..... p.12



Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

..... p.14



Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

..... p.16



Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

..... p.18



Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

..... p.20



Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

..... p.22



Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

..... p.24



Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

..... p.26



Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

..... p.28



Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

..... p.30



Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

..... p.32



Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

..... p.34



Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

..... p.36



Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

..... p.38



Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

..... p.40



Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

..... p.42

BIBLIOGRAFÍA p.44

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO p.46

AGRADECIMIENTOS p.47

INTRODUCCIÓN

En septiembre de 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas se reunieron en Nueva York para aprobar una agenda de desarrollo sostenible, denominada Agenda 2030. Esta agenda, fruto de un proceso de elaboración participativo que duró más de dos años, está estructurada en torno a 17 grandes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), subdivididos en numerosos indicadores y metas. La entrada en vigor de esta agenda permitió sentar las bases de un trabajo colectivo y fijar prioridades comunes para todos los Estados del mundo de aquí al 2030.

En América Latina y el Caribe, los ODS han resultado ser pertinentes en un continente que todavía tiene mucha desigualdad. A pesar del rápido y alentador crecimiento económico registrado en los años 2000, los Estados de la región se ven confrontados con graves dificultades en materia de desarrollo. En 2015, la tasa de pobreza se aproximaba al 29,2 % de la población regional, y la aplicación de políticas públicas sólidas y eficaces en materia social seguía representando un importante desafío para ciertos gobiernos.

Aun así, a escala mundial, se elogiaba a la región por la durabilidad de sus instituciones y de sus servicios públicos. Desde la década de los noventa, a menudo se ha distinguido por su potencial de creatividad y de innovación en materia de intervención pública. Tales bazas hicieron que se le pidiera una contribución directa al proceso de elaboración de la Agenda 2030, entre 2012 y 2015. Con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de otras organizaciones de las Naciones Unidas, se invitó a un gran abanico de actores gubernamentales y no gubernamentales

a compartir sus experiencias y lecciones aprendidas, para alimentar el proceso de localización y de afinado de las metas y de los indicadores de los ODS. Esta participación se pudo materializar con la organización de talleres y de espacios de diálogo que también han tenido un impacto muy positivo, a largo plazo, en la sensibilización de los actores latinoamericanos y caribeños sobre los desafíos del desarrollo sostenible. Este primer contacto constituyó una etapa importante en la apropiación de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe.

Hoy en día, esta agenda es conocida de un extremo al otro de la región y todos los Estados que la componen cuentan con una institución dedicada al seguimiento de su implementación. Muchos de ellos han integrado directamente los ODS en su planificación nacional y local. La mayoría de los institutos nacionales de estadística encargados de procesar los datos sobre el avance en las metas y los indicadores se han reforzado y ya pueden centralizar y armonizar las informaciones recogidas en los territorios. A nivel regional, la CEPAL sigue desempeñando un papel fundamental en el seguimiento de esos avances y en la promoción de la Agenda 2030.

No obstante, desde que los ODS entraron en vigor en 2015, la región se ha visto confrontada con una sucesión de crisis políticas, económicas y ambientales que han frenado mucho los avances. La pandemia de COVID-19, por sí sola, ha tenido un impacto devastador en todo el continente, causando un retroceso de una o varias décadas en ciertos sectores, especialmente en términos del nivel de vida de las poblaciones. En toda la región, se ha cuestionado fuertemente





la capacidad de los Estados para consolidar sus sistemas de protección social y, con ello, sus avances en la consecución de los objetivos establecidos en la Agenda 2030.

De hecho, algunos informes recientes sobre el estado de la aplicación del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe muestran proyecciones pesimistas sobre si se pueden lograr todos los objetivos en el plazo asignado. Lejos de ignorar la magnitud de los desafíos a superar, la presente obra pretende inscribirse en una perspectiva algo diferente con respecto a estos trabajos de prospectiva. Porque más allá de los bloqueos políticos, de los retrasos acumulados durante la crisis sanitaria y de todos los obstáculos encontrados, la creatividad, la determinación y, a veces, la resiliencia mostrada por ciertos actores en la región ha hecho emerger soluciones muy convincentes. Si bien no todas han dado resultados cuantitativos suficientes para cerrar la brecha de las desigualdades, han allanado el camino para avances cualitativos esenciales a medio y largo plazo. Recordar la importancia de estas contribuciones «invisibles» es una buena manera de rendir homenaje a sus protagonistas y de contribuir a la difusión de sus metodologías y buenas prácticas.

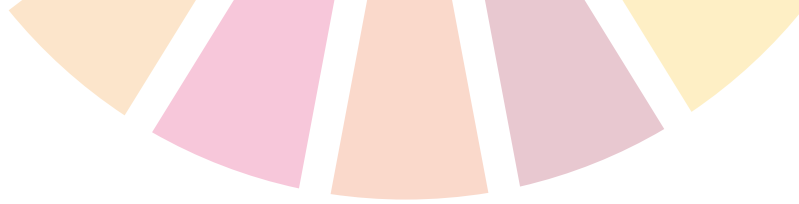
Esta obra, con la forma de un atlas que combina análisis y soportes gráficos y cartográficos, ofrece un panorama decididamente optimista de la implementación de la Agenda 2030 en la región, centrándose en valorizar los esfuerzos realizados desde 2015. Estructurada en torno a los 17 ODS, introduce para cada uno de ellos el caso de un programa o proyecto creativo, elaborado en uno o varios Estados de América Latina y el Caribe. Las 17 páginas dobles que

componen el núcleo de la obra están diseñadas para presentar todas estas contribuciones al desarrollo sostenible originales y recientes.


A escala multilateral, la estrategia de destacar las buenas prácticas ha demostrado rápidamente su eficacia para incentivar el progreso y la adopción de comportamientos virtuosos. Valorizar el impacto y el carácter innovador de ciertas medidas, gubernamentales o civiles, se ha convertido así en una forma de fomentar su replicación o de inspirar otras iniciativas del mismo tipo. En términos técnicos y metodológicos, este enfoque también ha tenido el mérito de difundir herramientas y saber hacer específicos en formatos muy didácticos, susceptibles de ser fácilmente apropiados por los actores.

Convencidos del potencial inherente a esta lógica de emulación y de aprendizaje, los autores de este atlas han optado por centrar el análisis de cada proyecto en la identificación de estas «buenas prácticas». Así pues, se han esforzado por destacar los mecanismos o los repertorios de acción que han considerado como más innovadores y más determinantes para el éxito de las iniciativas presentadas. Y si bien no todos muestran el mismo nivel de sofisticación o de institucionalización, en todo caso, abren pistas prometedoras para el futuro y para la replicación.

En la elaboración de la Agenda 2030, un aspecto crucial ha sido la participación activa de los gobiernos locales, de la sociedad civil y del sector privado, junto con los gobiernos nacionales y con sus aliados internacionales. A diferencia de sus predecesores, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los ODS debían poder ser promovidos e implementados a diversos niveles de gobernanza, por protagonis-



tas variados. La representación de esta diversidad ha sido una regla importante en la selección de los proyectos del atlas. En total, se puede considerar que cuatro de ellos están liderados por gobiernos nacionales (ODS 3, 14, 16 y 17), cuatro por autoridades locales (ODS 1, 4, 9 y 15), tres por organizaciones no gubernamentales o movimientos sociales (ODS 6, 11 y 12), uno por el sector privado (ODS 7), y cinco son posibles gracias al liderazgo de agencias internacionales o regionales (ODS 2, 5, 8, 10 y 13). Sin embargo, en realidad muchos son el resultado de una estrecha colaboración entre diferentes tipos de actores (ODS 2, 7, 9, 11, 12, 13 y 15 en particular). Si bien son más difíciles de clasificar, reflejan otra preocupación central en la concepción de la Agenda 2030: fomentar la cooperación y la creación de colaboraciones virtuosas dentro de las sociedades. Fieles al espíritu de los ODS, los autores de esta obra han dado un lugar importante a la exploración de mecanismos de coordinación y a otras palancas destinadas a promover el trabajo colectivo. En ciertas iniciativas, la mera construcción de espacios de diálogo entre varios tipos de actores con poca conexión o con intereses en competencia ha sido un logro (ODS 6) o incluso un avance histórico (ODS 16).

La identificación de sinergias entre los diversos indicadores y ODS dentro de los proyectos también fue un punto a tener en cuenta en la concepción del Atlas. La adopción de un código gráfico  ha permitido poner de relieve el potencial de transversalidad identificado dentro de ciertos proyectos, capaces de contribuir al logro simultáneo de varios ODS. Estas referencias visuales tejen una red de correspondencias entre las páginas del Atlas, sin agotar el número infinito de conexiones y de cruces entre los grandes ejes temáticos de la Agenda 2030.

En términos metodológicos, la concepción de esta obra está estructurada en cuatro grandes etapas: 1) la identificación de proyectos innovadores y de prácticas virtuosas dentro de ellos; 2) la definición de los criterios de selección y el establecimiento de una lista de proyectos que represente la diversidad geográfica, así como los diferentes tipos de protagonistas y de escalas de aplicación de las iniciativas en favor del desarrollo sostenible en la región; 3) la recogida de datos precisos sobre las iniciativas seleccionadas; y 4) la concepción del material visual y textual de las páginas dobles, basándose en las investigaciones efectuadas previamente.

Además de los criterios de selección mencionados anteriormente, el carácter innovador o incluso inédito de los proyectos era otra exigencia en la concepción de la obra. Los autores, deseosos de promover iniciativas aún poco conocidas y poco mencionadas en la literatura internacional, han dado prioridad a proyectos recientes, con el riesgo de que dichos proyectos todavía no cuenten con soportes de comunicación completos y accesibles y de que sus repercusiones no sean aún cuantificables. La escasez o la inaccesibilidad de los datos sobre los avances correspondientes obviamente ha representado un desafío en la fase de investigación y, a veces, incluso un obstáculo para la identificación de estas iniciativas. No obstante, el recurso a métodos de investigación empírica cualitativa, particularmente la realización de entrevistas con los protagonistas o beneficiarios de estas iniciativas, ha permitido superar estas dificultades. Su disponibilidad y su entusiasmo a la hora de compartir sus experiencias y sus datos internos de proyecto han sido fundamentales en la realización de los ODS 1, 2, 4, 5, 6, 8 y 11. Para los demás proyectos, la calidad y la

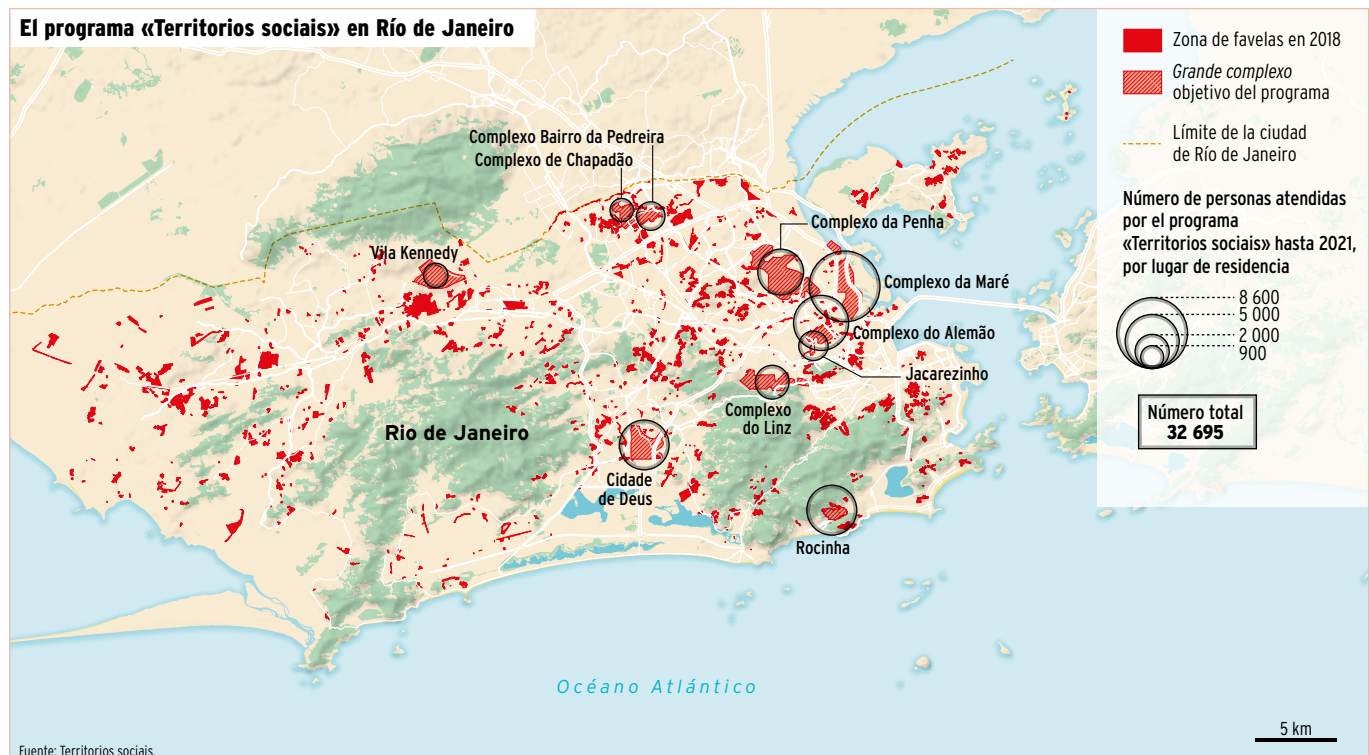
accesibilidad de las informaciones disponibles en línea, en sus sitios web o en plataformas dedicadas, también han sido bazas valiosas para la recogida de datos. En ambos casos, los autores del atlas han velado por valorizar el trabajo y las herramientas de comunicación de los actores y las actoras de las iniciativas, cuyas referencias están registradas en las fuentes de las ilustraciones, en la bibliografía y en los agradecimientos. Esperan que la publicación de esta obra contribuya a la difusión de ideas y a la valorización de los esfuerzos de estas personas y organizaciones.

Finalmente, la preparación de este atlas se ha enmarcado en un proceso pedagógico, ya que ha contado con la participación de dieciséis estudiantes de ciencias políticas de la universidad de Poitiers. La perspectiva de una generación directamente afectada por el logro de los ODS ha enriquecido la reflexión, sensibilizando a los contribuidores sobre los desafíos de pasar a la acción. En el marco de un seminario dedicado a la implementación de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, se centraron en los ODS 3, 4, 7, 10 y 13.

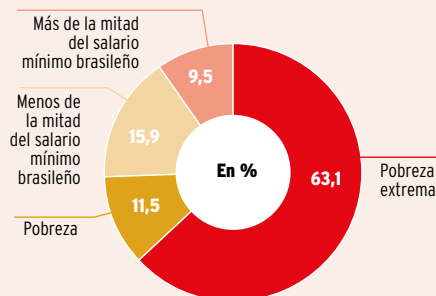


Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

En un momento en el que las consecuencias del cambio climático están afectando cada vez más a las poblaciones vulnerables, privadas de acceso a los recursos esenciales y a zonas de hábitat seguras y resilientes, la eliminación de la pobreza constituye un desafío prioritario de desarrollo.

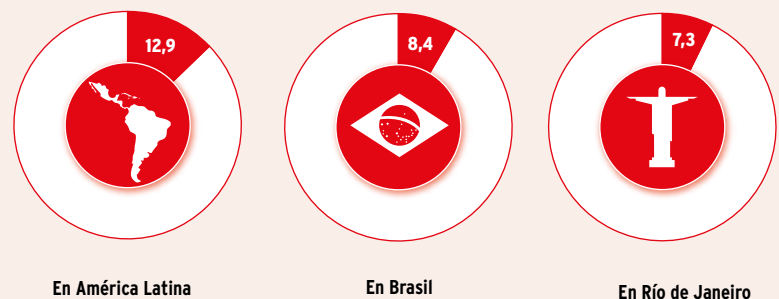


Ingreso medio de las familias atendidas por el programa



Tasa de pobreza extrema en 2021

Como % de la población total



Fuente: CEPAL.

Contexto regional

En la región de América Latina y el Caribe, en 2021, casi 201 millones de personas vivían en la pobreza y 86 millones estaban en situación de pobreza extrema, es decir, el 32,3 % y el 12,9 % de la población total, respectivamente. No obstante, se han realizado esfuerzos significativos para elevar el nivel de vida de las poblaciones en situación de gran precariedad. En los años 2000, algunos Estados implementaron a gran escala programas de asistencia para los hogares con más dificultades, basados en mecanismos de transferencias monetarias condicionadas. Por ejemplo, en Brasil, la Boisa Familia ha ayudado a atenuar las desigualdades de ingresos en todo el país y a mejorar la vida diaria de millones de familias.

Buscar a los «invisibles» en las favelas

También han surgido iniciativas de menor escala que han movido herramientas y palancas de acción cada vez más creativas para la reducción de la pobreza. En Río de Janeiro (Brasil), el Instituto Pereira Passos (IPP) lanzó en 2016 la fase piloto de «Territorios Sociais» (territorios sociales), un programa acorde con los desafíos de protección social (meta 1.3) y de acceso a los recursos y los servicios (meta 1.4) del Objetivo 1. Desde 2019, este último ha recibido el apoyo de la agencia ONU-Hábitat, lo que le ha permitido ampliar su espectro y su zona de intervención.

“ Hemos intentado aplicar el principio de «no dejar a nadie atrás» de la Agenda 2030. Para ello, no hemos buscado a familias pobres, sino a familias invisibles.

RAYNE FERRETTI,
coordinadora de ONU-Hábitat Brasil



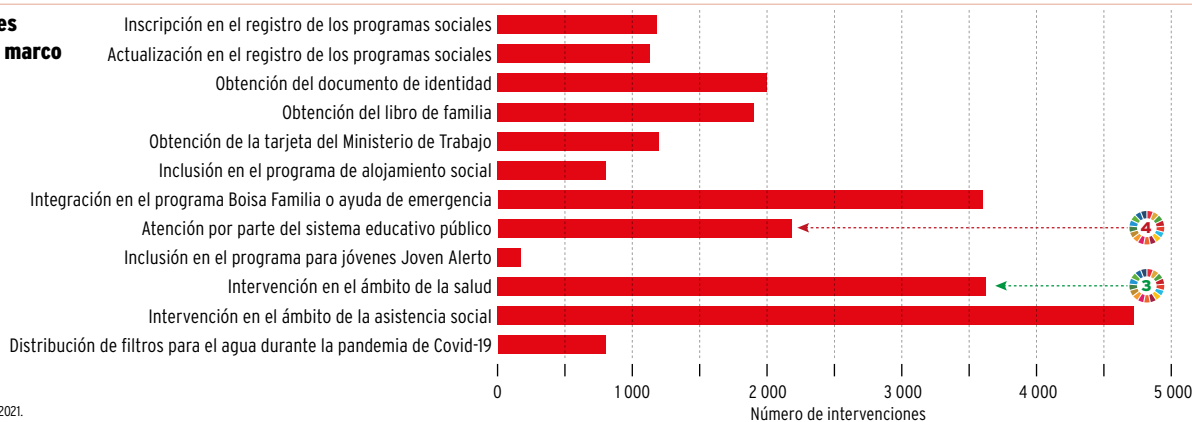
32 695
familias
seguidas en
febrero de 2021

Partiendo de la constatación de una heterogeneidad social dentro de las favelas, la ambición de este programa era ayudar a las familias más vulnerables integrándolas en los sistemas y los servicios públicos de los que a menudo se encontraban excluidas.

La implementación de Territorios Sociais se basó en una fase de diagnóstico bastante larga que permitió identificar bolsas de pobreza extrema dentro de las favelas, con herramientas informáticas y encuestas de puerta en puerta. Las herramientas de cartografía y otras tecnologías desarrolladas desde hace varios años dentro de instituciones locales fueron esenciales para la recogida y el análisis de los datos. Luego, la estrecha coordinación entre diversos servicios municipales permitió actuar en las zonas determinadas, siguiendo enfoques individualizados, caso por caso. Así, las familias elegibles pudieron ser inscritas o reinscritas en el registro único para los programas sociales del gobierno brasileño, para que se beneficiaran de servicios básicos en materia de salud, de asistencia social, de educación, etc.

En 2019, Territorios Sociais fue premiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se ha distinguido por sus resultados concluyentes, pero también por su permanencia: sigue vigente, sobreviviendo a dos alternancias electorales a nivel municipal y ahora está siendo objeto de intentos de replicación.

Tipos de acciones realizadas en el marco del programa

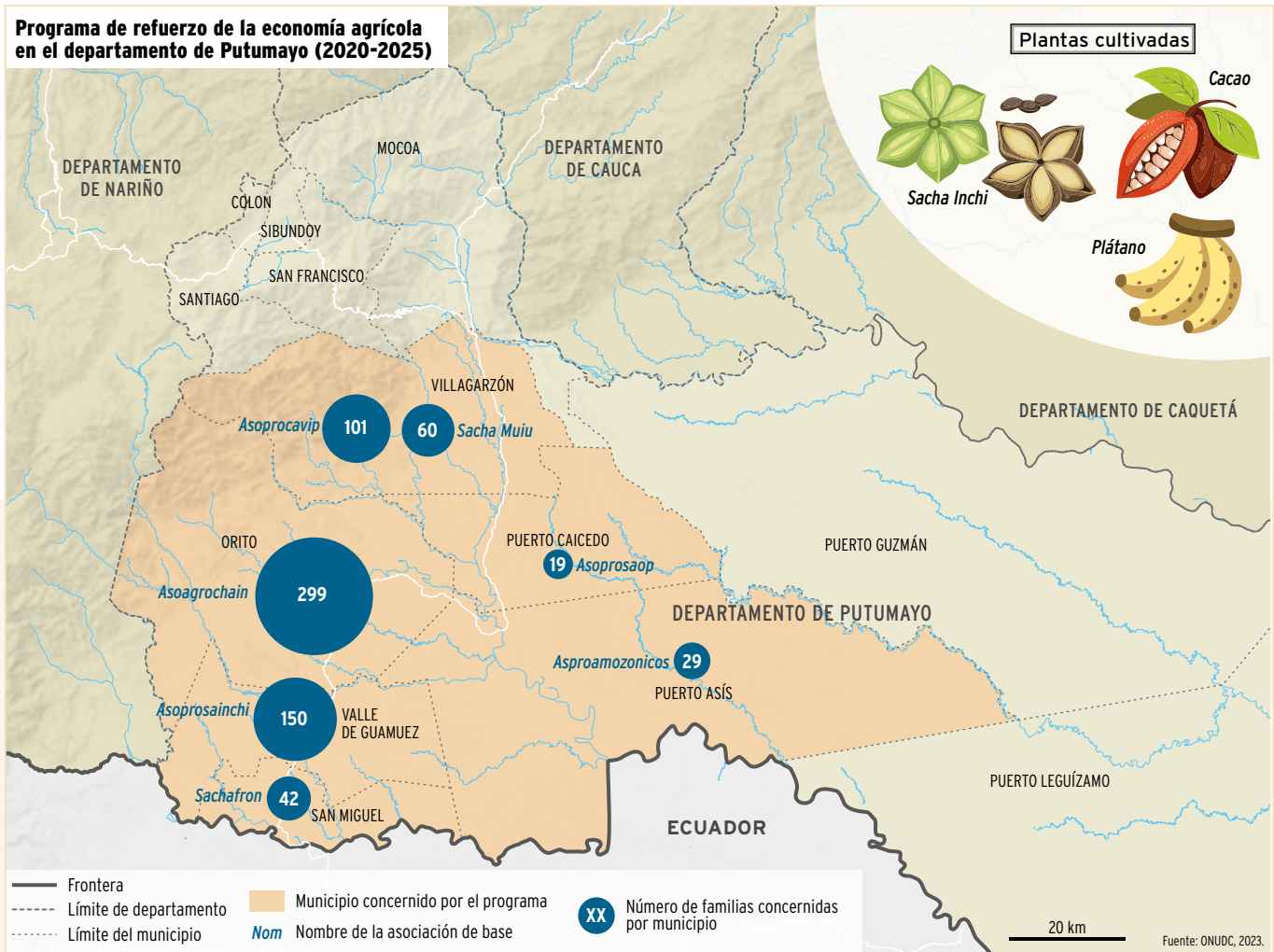


Fuente: Territorios sociais, 2021.



Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

En América Latina y el Caribe, el número de personas que sufren hambre ha aumentado significativamente durante y después del período de pandemia, llegando a casi 60 millones de personas en el apogeo de la crisis. Paradójicamente, los pequeños productores agrícolas de la región se han encontrado particularmente expuestos a situaciones de inseguridad alimentaria, puesto que sus ingresos se ven afectados tanto por la recesión económica como por los desastres naturales, cada vez más numerosos con la aceleración del cambio climático.



En Colombia, un contexto agrario marcado por la pobreza y la violencia

En Colombia, la huella del conflicto armado ha contribuido a empeorar la situación de los pequeños productores rurales, atrapados en contextos de violencia y de pobreza extrema. La coca, una planta ancestral con virtudes medicinales, se ha impuesto a veces como el único cultivo rentable en los territorios más remotos, debido a su transformación en «cocaína», una droga muy buscada por las redes mundiales de narcotráfico. En muchos casos, los grupos armados han forzado a los pequeños productores a cultivarla, convirtiéndolos en el blanco de la represión ejercida por el Estado, en el marco de la guerra contra las drogas.

Si bien la firma de los acuerdos de paz en 2016 no ha erradicado por completo la violencia ni ha atenuado la influencia del narcotráfico en el país, al menos ha permitido sacar a la luz la complejidad de las situaciones de estos productores y reflexionar sobre medidas más sostenibles, favoreciendo, por ejemplo, el principio de «sustitución».

Apoyar la producción de sacha inchi en Putumayo

En Putumayo, un departamento colombiano particularmente afectado por el conflicto y sus efectos colaterales, el cultivo del sacha inchi ha surgido como una solución concluyente de sustitución de la coca, debido a su rentabilidad y al reciente redescubrimiento de sus propiedades nutritivas. Esta semilla, ya explotada en Perú, la utilizaban tradicionalmente los pueblos indígenas.

En la localidad de Puerto Caicedo, los productores que habían optado por el sacha inchi a finales de la década del 2000 rápidamente decidieron unirse en una cooperativa, con el fin de poner en común sus aprendizajes. Esta iniciativa les permitió asumir juntos los costes asociados con los modos de comercialización y de transformación

de esta semilla, vendida en forma de aceite o de semillas tostadas. La Asociación de productores de sacha inchi del municipio de Puerto Caicedo, Putumayo (ASOPROSAOP) ha consolidado los vínculos entre ellos. También ha dado impulso a acciones de sensibilización y de promoción en torno a los desafíos de la sustitución de los cultivos ilícitos de coca.

En 2020, ASOPROSAOP se unió a la lista de socios de un ambicioso proyecto para reforzar la economía agrícola en el departamento de Putumayo. La iniciativa, dirigida por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), ha sido posible gracias a los esfuerzos de los poderes locales, particularmente la Gobernación del Putumayo, pero también gracias al apoyo financiero decisivo de la Agencia coreana de desarrollo internacional (KOIKA) y del gobierno nacional colombiano. Estas subvenciones han permitido que 700 familias, afiliadas a siete organizaciones de base diferentes, se beneficien de un acompañamiento en materia de refuerzo de sus capacidades productivas agrícolas. Paralelamente al cultivo de sacha inchi, en el centro del programa, se ha animado a estas familias a desarrollar un producto secundario (plátano o cacao), para asegurar sus ingresos y participar en una producción alimentaria más diversa en la región.



490 hectáreas
de sacha inchi
cultivadas



Es decir, de media
1,47 hectáreas
cultivadas
por familia



52 %

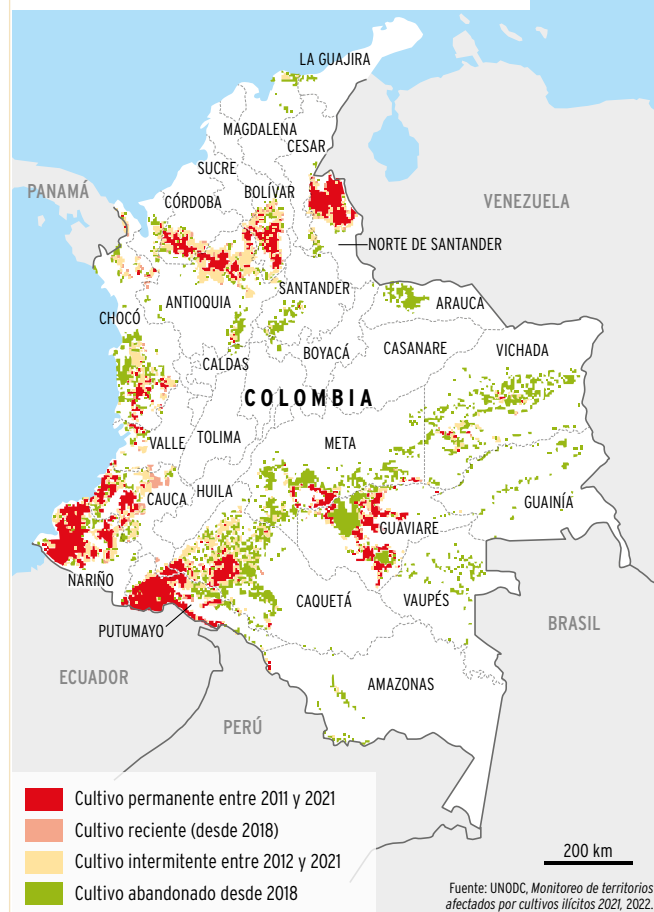
de productores



48 %

de productoras

Evolución de los cultivos ilícitos de coca desde 2011





Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

Entre 1980 y 2014, la prevalencia de la obesidad aumentó más del doble a nivel mundial, lo que llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a calificar a esta enfermedad como una epidemia mundial. Definida como una «acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud» (OMS), la obesidad está vinculada a un cambio en los hábitos alimentarios, con un creciente consumo de alimentos procesados y de productos ricos en cereales y en azúcar.

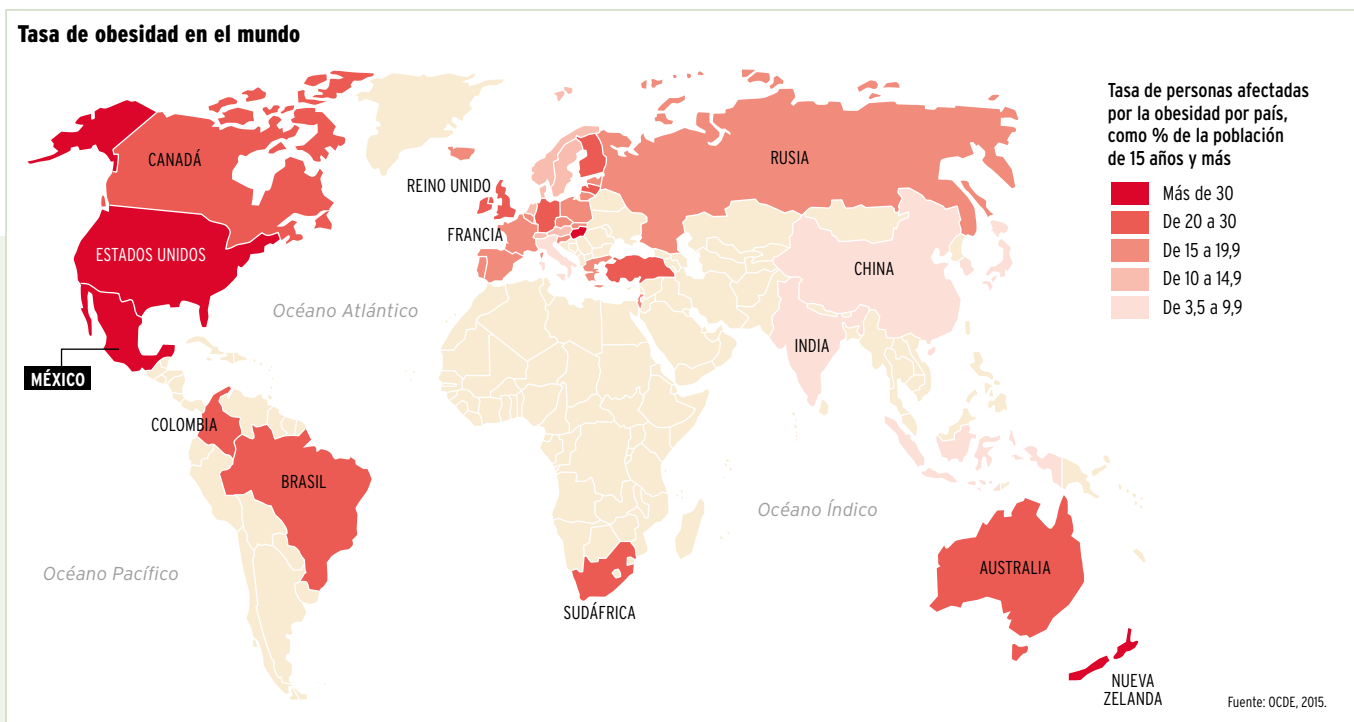
Una tasa de obesidad récord en América Latina y el Caribe

En comparación con las demás regiones del mundo, América Latina y el Caribe están particularmente preocupadas por este desafío sanitario. Según un informe de la ONU de 2019, la tasa de obesidad regional se había triplicado desde 1975 y casi doblaba la media mundial en 2016. En México, el 30 % de los adultos están directamente afectados y el 70 % tienen sobrepeso. En este país, la situación sanitaria es aún más preocupante, ya que la tasa de obesidad infantil aumenta con regularidad. Para los especialistas, este contexto de rápido crecimiento de la obesidad es una consecuencia indirecta de transformaciones sociales profundas inducidas por ciertos acuerdos de libre comercio, como el

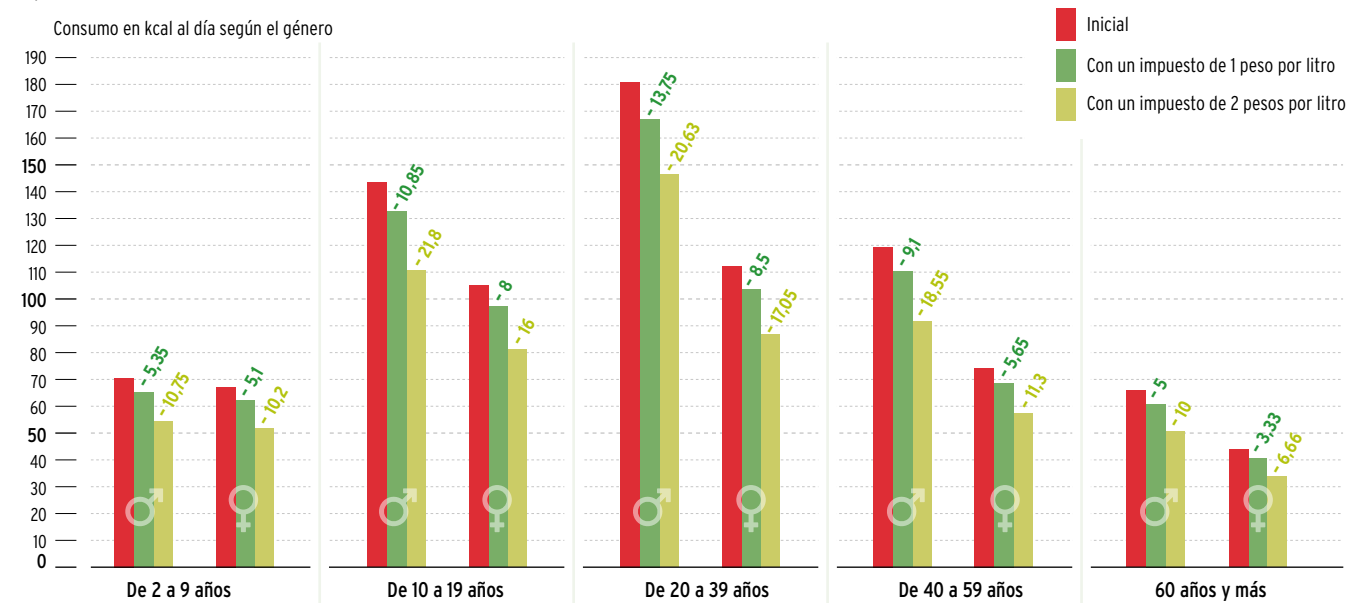
acuerdo de América del Norte (TLCAN). No obstante, para contrarrestar sus efectos y promover hábitos alimentarios más saludables, se pueden adoptar medidas reguladoras.

La lucha contra la obesidad en México

En México, todo un arsenal de políticas públicas ha sido implementado por el gobierno federal en los últimos diez años. Con el fin de hacer que su acción sea a largo plazo y generar cambios estructurales, las autoridades se han dirigido a los públicos jóvenes. Con la adopción de medidas restrictivas, han tratado de actuar direc-



Impuesto de 2014 sobre bebidas azucaradas en México: estimación de cambios en el consumo sobre 10 años



Fuente: «Cost-Effectiveness Of The Sugar-Sweetened Beverage Excise Tax in Mexico», Health Affairs, noviembre de 2019.

tamente sobre su acceso a alimentos considerados de riesgo, por ejemplo, prohibiendo la venta o la distribución a menores de edad de bebidas azucaradas gaseosas envasadas y de alimentos con ácidos grasos procesados o niveles excesivos de azúcar. Algunas medidas complementarias han reforzado la prohibición de estos alimentos dirigiéndose directamente a las instituciones implicadas en la educación de los menores, particularmente las escuelas y los centros de salud. En estos espacios, así como en los hospitales y las clínicas, también se han retirado las máquinas expendedoras de alimentos procesados.

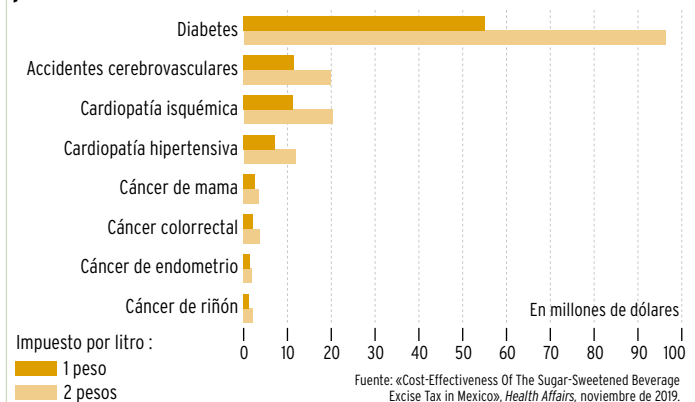
Otras medidas se han centrado en las actividades comerciales de distribución y promoción de la «comida basura», prohibiendo cualquier publicidad dirigida a menores, o instaurando un sistema de etiquetado nutricional y un impuesto sobre las bebidas azucaradas. Este último,

que asciende a 1 peso por litro de bebida azucarada, se introdujo en 2014, con efectos significativos a largo plazo, especialmente sobre la diabetes. Se prevé su duplicación. Además de estas medidas prohibitivas, México también ha promovido acciones de sensibilización relacionadas con la práctica deportiva. Se ha establecido un programa gubernamental en los centros escolares públicos para animar a los jóvenes a participar en actividades deportivas y promover hábitos alimentarios más saludables. En 2015, la Ciudad de México incluso decidió ofrecer un ticket de metro a los usuarios que fueran capaces de realizar 10 sentadillas, frente a un detector de movimientos instalado en ciertas estaciones. Las acciones innovadoras combinadas que se han llevado a cabo en todo el país ya han inspirado a ciertos Estados vecinos, como Chile o Perú, que han adoptado medidas similares.

El coste económico de la obesidad

El impacto económico y social de la obesidad es alto. En América Latina y el Caribe, las enfermedades asociadas a un índice de masa corporal [IMC] superior o igual a 30 costaron millones de dólares en 2010. La pérdida de productividad causada por las muertes prematuras relacionadas con estas enfermedades es enorme. Según la OCDE, la obesidad causó que México perdiera el 5,3 % de su PIB en 2019.

Impuesto de 2014 en México: ahorro en gastos sanitarios por enfermedad estimados en 10 años





Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

La crisis de la Covid-19 ha provocado un deterioro de los sistemas educativos, sobre todo en los países donde las restricciones han sido más numerosas. Las diferencias en el acceso a Internet y el acompañamiento a domicilio han acentuado las desigualdades escolares entre los países y las poblaciones. Para los alumnos de preescolar, en un periodo crucial de su desarrollo, la situación ha sido particularmente perjudicial.



La educación y la primera infancia en Argentina

La pandemia ha impactado fuertemente la educación en Argentina, con cierres de las escuelas parciales o totales durante 79 semanas. Según las pruebas de rendimiento del Ministerio de Educación de Argentina, la proporción de alumnos con dificultades para leer al final del ciclo de primaria aumentó del 7,1 % al 22,3 % entre 2018 y 2021. En matemáticas, la regresión fue menos pronunciada pero igualmente significativa: los alumnos con dificultades representaban el 23,1 % en 2021 frente al 19,6 % en 2018.

Por otra parte, la crisis ha exacerbado las desigualdades entre las escuelas públicas y las privadas. En Argentina, las escuelas privadas proponen una escolarización a partir de los 2 años de edad, mientras que la edad legal de escolarización consagrada en la Constitución está fijada en 4 años. Como consecuencia de esta diferencia, la tasa de repetición en las escuelas de primaria públicas generalmente es más alta. A esto hay que añadir disparidades territoriales entre las diferentes provincias del país, como lo demuestran los resultados de las evaluaciones nacionales «Aprender» en matemáticas y en lengua. La ciudad de Santa Fe, con 415 345 habitantes, capital de una provincia que ocupaba el décimo lugar de la clasificación en 2021, ha buscado luchar contra las desigualdades estructurales del sistema educativo y extender la acción educativa más allá de las escuelas. Desde diciembre de 2020, se han puesto en marcha varios proyectos pedagógicos relacionados con la cultura y la arquitectura para contrarrestar los efectos de la pandemia.

Santa Fe: un enfoque innovador

El proyecto «Integrar Santa Fe» busca crear las condiciones para una integración social y urbana de calidad, especialmente en los barrios más pobres. Tiene como objetivo proporcionar servicios urbanos y optimizar el entorno a través de la recuperación y el aprovecha-

miento de las veredas (o aceras). Ya se han acondicionado más de 80 veredas en las que se llevan a cabo actividades recreativas. Entre ellas, destacan los talleres de poesía o de pintura, así como los juegos para niños como la rayuela.

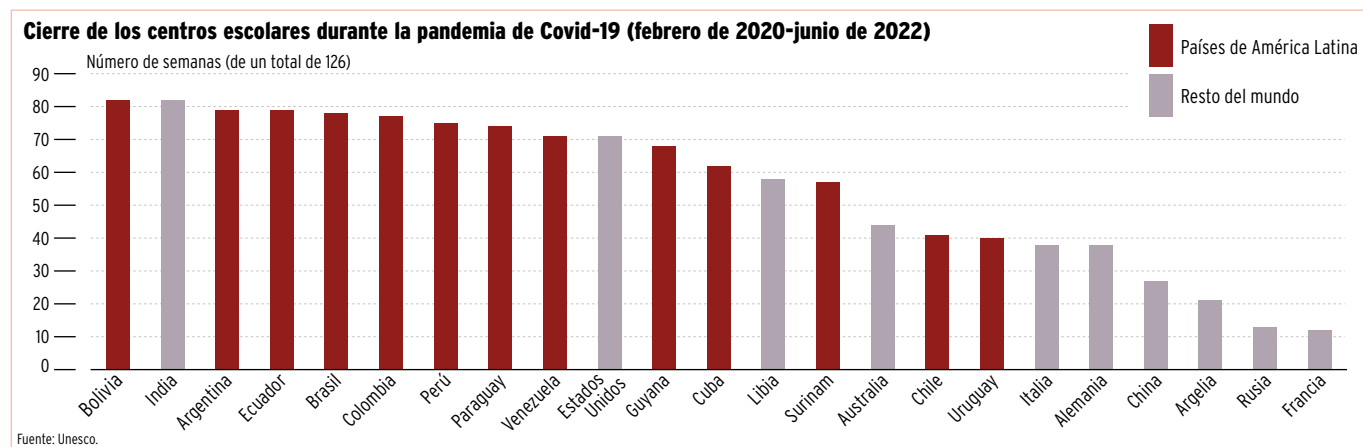
Otro proyecto, llamado «Estaciones», ha promovido la utilización de edificios municipales para proporcionar actividades de convivencia y de orientación social destinadas a los niños, así como servicios y atención. También ha establecido talleres para reducir las desigualdades a nivel del aprendizaje de la lectura y de la escritura. En septiembre de 2023, la ciudad ya contaba con 18 estaciones activas para acoger a los niños y a sus familias.

“ Estas realizaciones cambian la vida de los profesores, de los alumnos y del barrio. EMILIO JATÓN, ALCALDE DE SANTA FE ”

Por último, el programa «La ciudad aprende en casa» fue lanzado por el municipio para acompañar a los niños durante la pandemia. Consiste en proporcionar contenidos pedagógicos y lúdicos que los niños pueden utilizar con sus padres. Hasta la fecha, se han grabado 22 audiolibros, descargables en línea, y más de 1 600 niños de clases de primaria ya se han beneficiado de ellos.

Santa Fe es la única ciudad de Argentina y de América Latina que ha implementado una política tan sólida y multidimensional destinada a los niños. Estas iniciativas le han permitido hacer frente a la pandemia mejorando las condiciones de vida de sus habitantes y favoreciendo la educación.

Desde el final de la crisis sanitaria, la ciudad ha retomado sus actividades de integración social, financiadas por su fondo de asistencia educativa. Se siguen realizando ejercicios de lectura en las escuelas e intervenciones en materia de educación cívica, a fin de remediar los retrasos acumulados en el avance de los programas escolares y el aprendizaje de los niños.





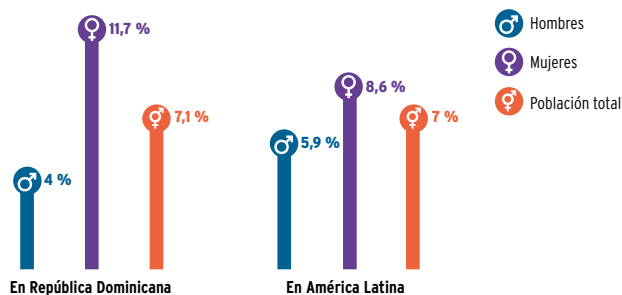
Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

La cuestión del género ocupa un lugar central en la Agenda 2030; es transversal a la casi totalidad de los ODS. Las iniciativas presentadas en esta obra muestran diversos ejemplos de cómo se tiene en cuenta este desafío en América Latina y el Caribe, en proyectos relacionados con la educación, la salud, la vivienda, etc. No obstante, el ODS 5, recuerda la necesidad de adoptar políticas públicas sólidas que estén centradas directamente en la paridad o en el empoderamiento de las mujeres.

Desigualdades de género persistentes en el mundo del trabajo

En América Latina y el Caribe, la inclusión desde hace mucho tiempo en la agenda política de la cuestión de las desigualdades relacionadas con el sexo o el género ha permitido avances en materia de respeto de los derechos de las mujeres y de las niñas, y en aspectos específicos como el establecimiento de políticas de cuotas y la feminización de los cargos políticos. Pero las mejoras no han sido tan claras en otros sectores: los indicadores de salarios, de pobreza por sexo y de desempleo reflejan una situación todavía preocupante en materia de trabajo y de acceso a las oportunidades, que se ha agravado con la pandemia de COVID-19.

Tasa de desempleo desglosada por sexo para el año 2022

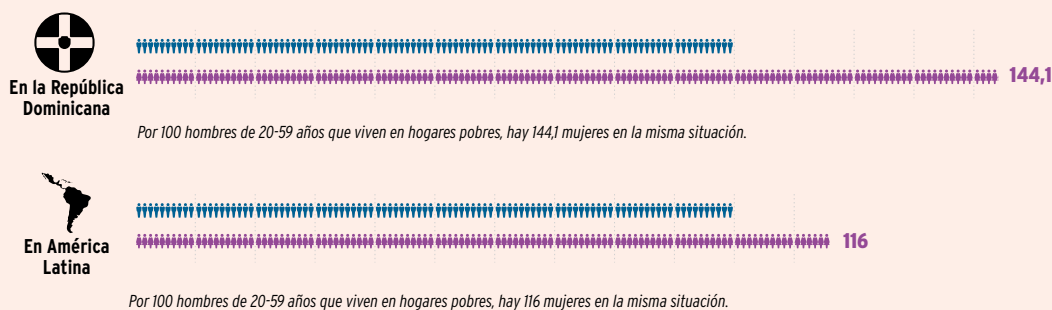


Fuente: OIT, 2023 (ILOstat, estimaciones).

Una palanca regional para la paridad de género

En un intento de reducir estas desigualdades, en 2016 se lanzó un programa plurinacional llamado «Iniciativas de paridad de género» (IPG), fruto de una colaboración entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Foro Económico Mundial (FEM). Juntos, estos dos actores se fijaron el objetivo de reforzar la inserción económica de las mujeres favoreciendo su acceso a empleos decentes en el sector privado y en las administraciones públicas. Desde 2018, la Agencia

Índice de feminidad de los hogares pobres en 2021

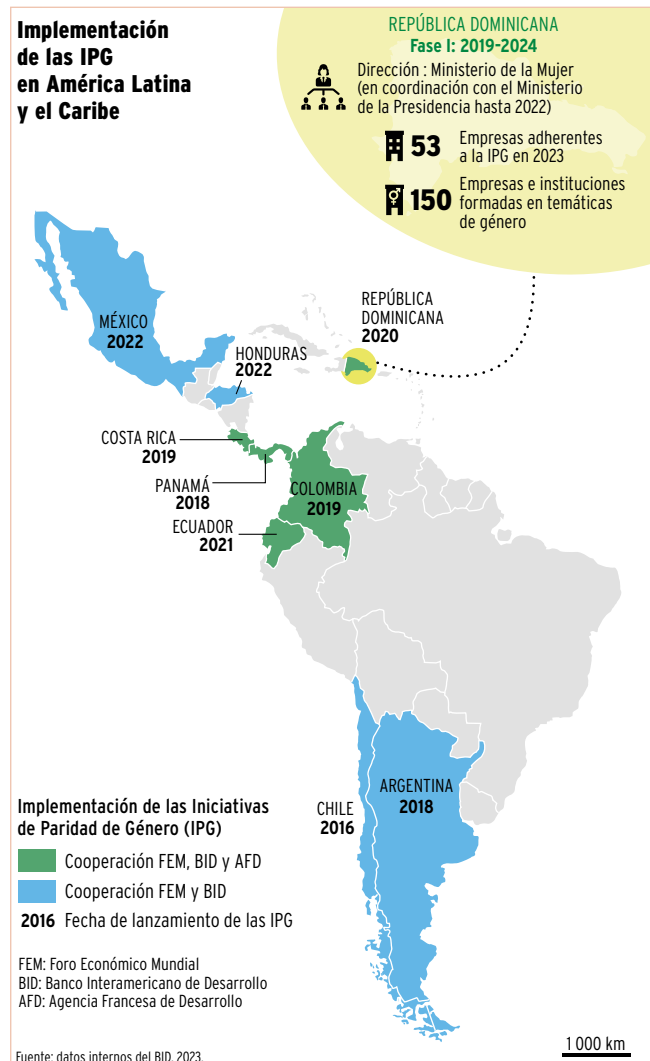


Francesa de Desarrollo (AFD) se sumó a sus esfuerzos y actualmente está contribuyendo al financiamiento de operaciones realizadas en cinco países, entre ellos, la República Dominicana.

Reforzar la integración económica de las mujeres en la República Dominicana

Con una tasa de desempleo femenino que duplica a la de los hombres y con tres de cada diez mujeres realizando trabajos domésticos no remunerados, la República Dominicana es muy desigual en materia de género y de acceso a las oportunidades económicas. Desde el inicio de los años 2000, este Estado ha tratado de paliar este problema con la implementación de tres planes nacionales de igualdad y de equidad de género sucesivos (PLANEG I, II y III). El más reciente, lanzado en 2018, hace una referencia directa a la Agenda 2030 e intenta estar en línea con varios ODS. El Ministerio de la Mujer, responsable de su aplicación, también ha decidido adoptar el concepto de IPG a fin de beneficiarse del apoyo estratégico de actores con experiencia en materia de cierre de brechas de género. En la primera fase de las IPG (2019-2024), se han celebrado talleres centrados en el refuerzo de las capacidades en las instituciones nacionales encargadas de aplicar la agenda nacional de igualdad de género. También se ha llevado a cabo una importante labor de sensibilización con los actores del sector privado, a fin de promover una cultura de equidad y paridad en el mundo empresarial. Con esta perspectiva, el establecimiento de una etiqueta de igualdad de género a nivel nacional (InigualandoRD) ha constituido una innovación importante.

A mediados del 2023, 53 empresas nacionales se unieron a las IPG, incluyendo a gigantes de las telecomunicaciones como Altice o Huawei. Con el tiempo, la creación de colaboraciones virtuosas entre las instituciones públicas y el sector privado en la República Dominicana debería ayudar a promover el acceso de las mujeres a mejores



oportunidades profesionales y salariales. Para ello, el programa prevé expresamente el refuerzo de su participación en sectores estratégicos de la economía, como las ciencias, las tecnologías, la ingeniería y las matemáticas.

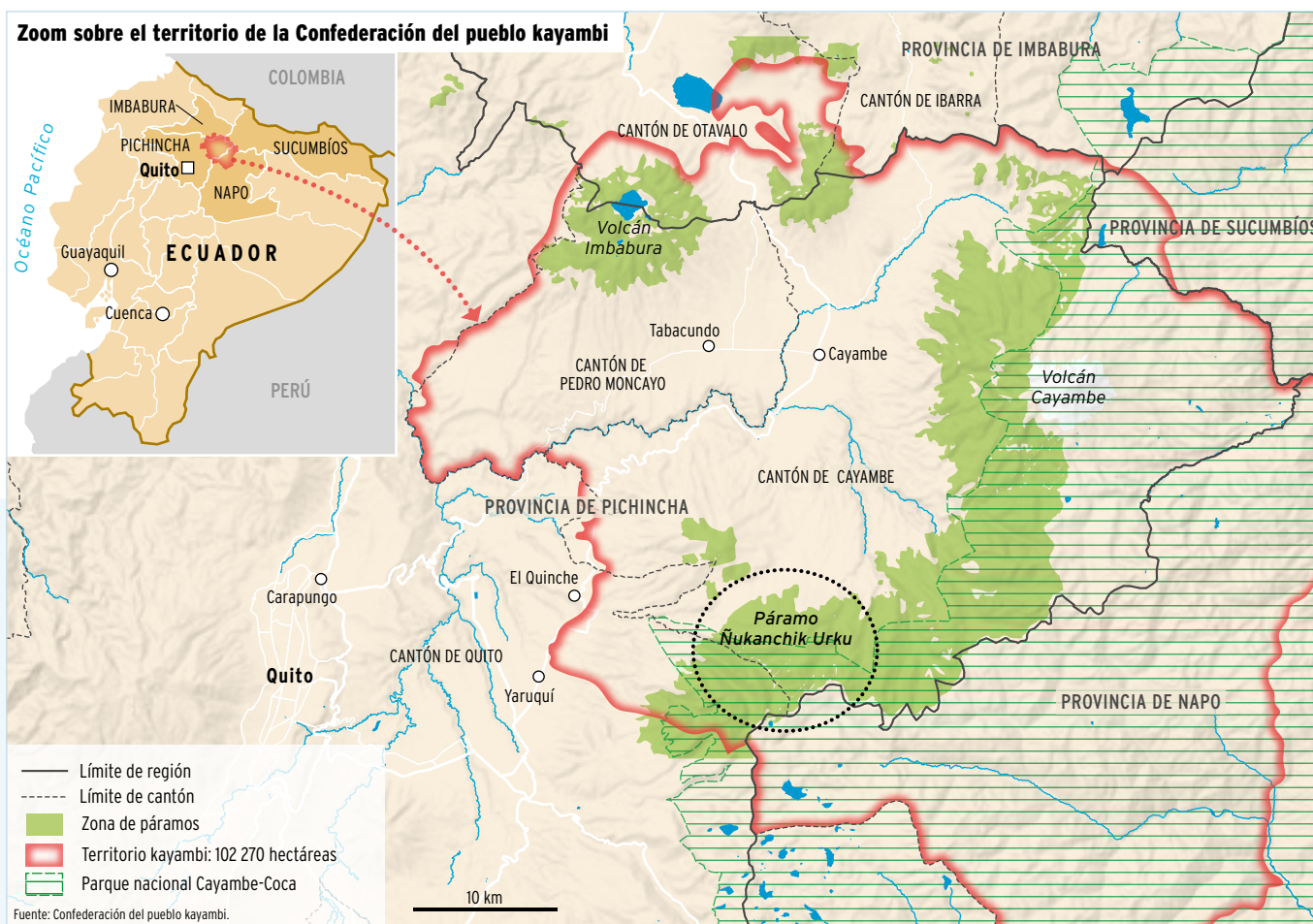
Las IPG son una palanca de cooperación internacional destinada a reducir la brecha de género en los ámbitos económicos y del trabajo. El concepto nació en 2012, bajo el impulso del FEM. Este actor ya estaba en el origen de la creación, en 2006, del Índice Global de Brecha de Género [GGGI –Global Gender Gap Index], una metodología basada en la consideración de cuatro dimensiones esenciales [económica, política, educativa y de salud] para medir la brecha entre las mujeres y los hombres en la distribución de los recursos y las oportunidades. Según este método de cálculo, una puntuación igual a 1 equivale a la paridad perfecta y una puntuación cercana a 0 muestra una gran brecha entre los sexos.

La República Dominicana ocupa el puesto **19** en el ranking regional con un **GGGI** de **0,703** para el año **2022** y es uno de los países latinoamericanos más **desiguales** en materia de **género**.



Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

En América Latina y el Caribe, el acceso al agua potable ha mejorado significativamente en las últimas décadas, principalmente como resultado de los esfuerzos a nivel local y nacional en materia de suministro de servicios públicos. No obstante, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informaba en 2019 de que 7 de cada 10 personas seguían sin tener acceso al tratamiento de las aguas en la región.



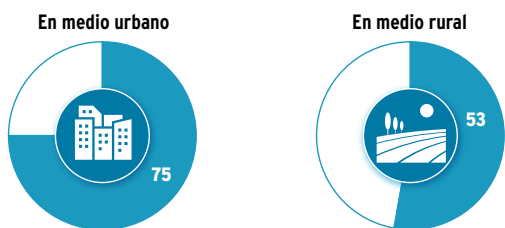
Los desafíos relacionados con la gestión de los recursos hídricos en el medio rural

En los países latinoamericanos, la cuestión del acceso al agua se plantea principalmente a nivel rural. En 2020, mientras que el 81 % de la población tenía acceso a agua potable controlada en las zonas urbanas, sólo el 53 % de la población rural podía tener acceso. Además de este problema de suministro, la preservación de los recursos hídricos amenazados por los vertidos contaminantes constituye un desafío importante, puesto que numerosas comunidades dependen de la buena salud de las corrientes de agua y los océanos para sus actividades productivas (pesca, piscicultura) y su seguridad alimentaria.

Una movilización colectiva en torno al páramo Ñukanchik Urku

En los Andes ecuatorianos, las comunidades del pueblo kayambi han estado trabajando desde hace varias décadas para preservar los páramos, ecosistemas únicos de la región andina y esenciales para su abastecimiento de agua. En 1995, la creación del comité del páramo Ñukanchik Urku en el cantón de Cayambe ayudó a consolidar su lucha, en un contexto de creciente rivalidad por el acceso al agua, reivindicado tanto por actores privados (empresas) como por colectividades públicas. Para garantizar la protección del páramo comunitario contra los incendios y las prácticas ilegales o las entradas ilegales al territorio, los *Urku Kamas* (equivalentes a «guardas forestales») voluntarios realizan rondas de vigilancia cada semana. La movilización del comité también ha recibido la atención y el apoyo del ámbito académico, con la creación de un proyecto de investigación-acción sobre la compartición y la conservación de los recursos hídricos en esta región, por parte de investigadoras de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) y de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Esto ha permitido consolidar la causa de las comunidades Kayambi, especialmente gracias a la organización de talleres

Parte de la población con acceso a un servicio de agua potable en Ecuador En %



Fuente: Cepal, 2020.

Los páramos son ecosistemas frágiles que se encuentran a altitudes que varían entre los 3 000 y los 4 500 m, en las montañas tropicales de América Central y del Sur. Al albergar una flora endémica muy rica, desempeñan un papel de regulación hídrica natural y tienen una función socioeconómica primordial para los pueblos indígenas y los habitantes de la región andina.

de formación sobre técnicas de promoción. Algunas mediciones de calidad efectuadas en las corrientes de agua próximas también han proporcionado a las comunidades nuevos argumentos técnicos y políticos a esgrimir ante las autoridades locales y nacionales para luchar contra los vertidos contaminantes realizados por ciertas empresas.

En un país en el que el rol de las organizaciones de base en la conservación de los recursos hídricos ya goza de reconocimiento constitucional, el comité ahora espera ver su lucha recompensada con la facilitación de fondos y de palancas jurídicas más sólidas para seguir protegiendo el páramo de Ñukanchi Urku.





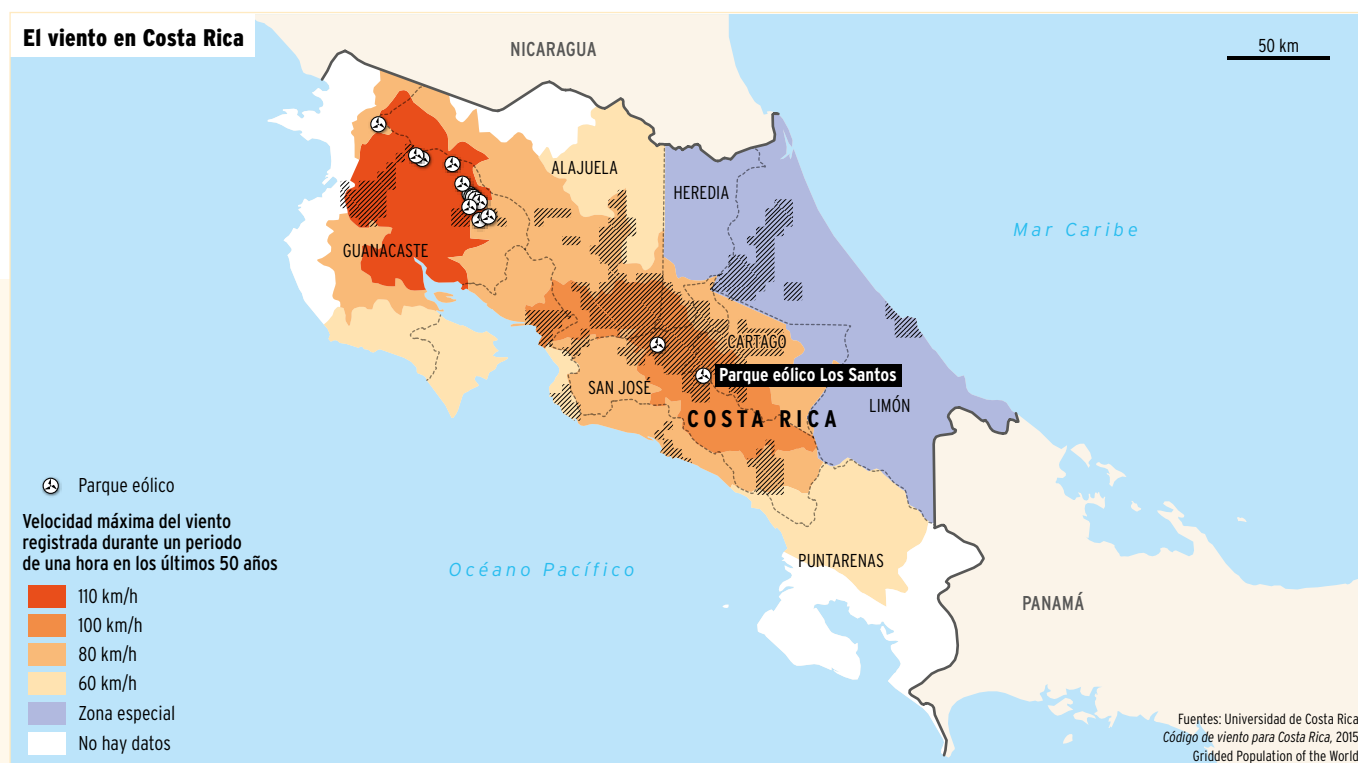
Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

Desde principios de la década del 2000, la cuestión energética ha ocupado un lugar central en la agenda de desarrollo en América Latina, lo que ha llevado a numerosos Estados a reforzar sus estrategias nacionales de suministro y de gestión de las energías.

Si bien casi toda la población disfruta ahora de un acceso fiable a la electricidad, siguen existiendo grandes desafíos planteados para aumentar la sostenibilidad y la eficiencia de los modelos energéticos vigentes.

Financiar la transición energética



En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la transición hacia energías más limpias y sostenibles constituye uno de los grandes objetivos fijados por el ODS 7. Sin embargo, la transición a modelos de suministro basados en el recurso a energías renovables conlleva costes significativos, generados especialmente por el establecimiento de nuevas infraestructuras. En la región de América Latina y el Caribe, la cooperación internacional y las colaboraciones público-privadas han ofrecido soluciones de financiación concluyentes para acompañar a los gobiernos en la aplicación de estrategias energéticas más sostenibles. En las últimas dos décadas, ciertos Estados de la región se han distinguido por su compromiso muy activo en este ámbito, como Costa Rica, que en 2019 adoptó un ambicioso plan de descarbonización.



Costa Rica, líder regional en materia de energías renovables

Costa Rica, a veces designada como «el país de la electricidad renovable», ha implementado una estrategia muy eficaz y diversificada en materia de suministro energético. En 2022 y por octavo año consecutivo, produjo más del 98% de energía renovable, una proporción equivalente a la de Noruega. Además de sus catorce centrales hidroeléctricas (que producen el 70% de la electricidad consumida a nivel nacional) y el aprovechamiento de su cadena de volcanes activos a través de sistemas geotérmicos, el país ha decidido desarrollar la energía eólica, con el apoyo de socios privados internacionales.

Una contribución virtuosa del sector privado a los ODS

El proyecto «Parque eólico Los Santos» iniciado a principios de 2010 sobre los restos de un antiguo proyecto de central energética no renovable, consistió en la construcción de un parque eólico en la región montañosa de Los Santos, ubicada al sur de la capital San José. Resultado de una fructífera cooperación entre un actor local, la cooperativa de electrificación rural Los Santos Coopesantos y la empresa alemana Carbonbay (iniciadora de numerosos proyectos de desarrollo relacionados con energías renovables en todo el mundo), la construcción del parque y su puesta en funcionamiento se llevó a cabo bajo la atenta mirada de los habitantes de la región, reunidos en comités de coordinación. También se prestó una atención constante a cómo el proyecto contribuía a los ODS  y .

El parque eólico Los Santos en cifras

Superficie **46 hectáreas**

Velocidad media del viento **10 m/s (36 km/h)**



Producción anual

20 000 MWh

7 grupos de turbinas eólicas

850 kW por turbina eólica

15 aerogeneradores

El parque permite proporcionar electricidad limpia a 50 000 costarricenses (11 000 hogares) en la región



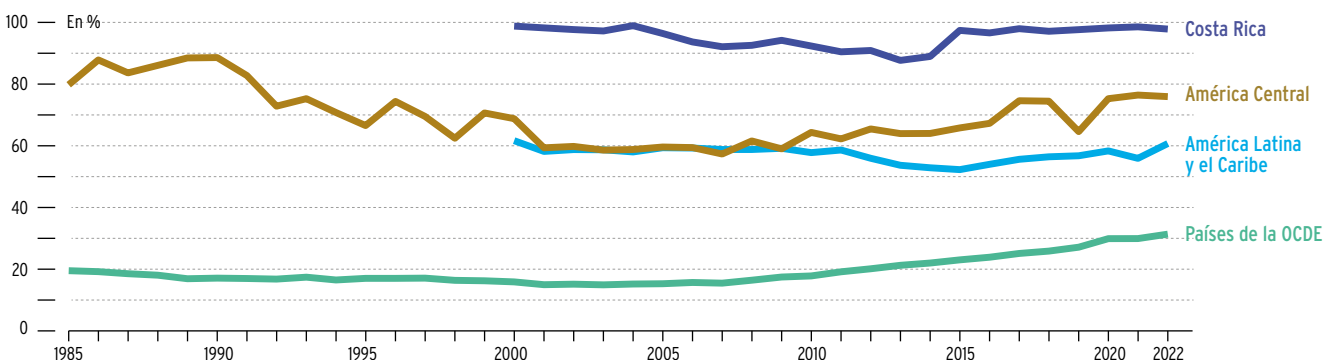
Reducción de las emisiones de CO₂ del país en aproximadamente **15 000 toneladas**

La región de Los Santos, famosa por ser muy ventosa, constituía una zona de implantación estratégica, al tratarse de un territorio rural al margen del desarrollo del país y mal conectado a los circuitos de distribución de electricidad. Por lo tanto, desde el principio, la construcción del parque eólico tenía por objeto beneficiar a los habitantes de la región por partida doble, mejorando su suministro energético y generando oportunidades de empleo. Este doble objetivo se ha logrado.

En el plano energético, los recursos producidos por el parque eólico han permitido producir 20 000 MWh de electricidad al año y suministrar energía limpia a 50 000 personas, garantizando un acceso más seguro a los habitantes de la región. En el plano socioeconómico, el parque eólico ha generado directamente seis empleos técnicos cualificados a tiempo completo, así como catorce empleos indirectos. Coopesantos sigue siendo el operador del parque y contribuye de forma sostenible a la producción energética nacional.

Proporción de electricidad procedente de energías renovables

Energía hidroeléctrica, fotovoltaica, eólica, de la biomasa, geotérmica y mareomotriz



Fuente: ourworldindata.org.



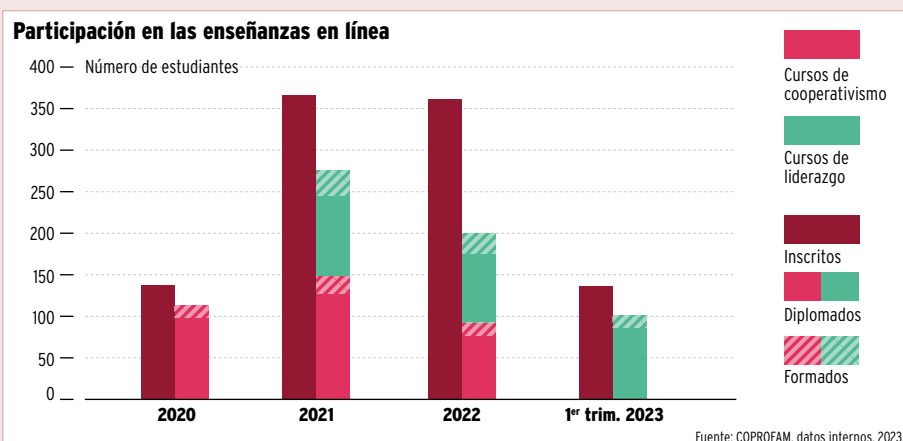
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

La agricultura, a pesar de ser considerada como un sector de baja productividad económica, representa una fuente sustancial de empleo en América Latina y el Caribe. Absorbía casi el 18 % de la mano de obra activa total entre 2014 y 2021, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, se caracteriza por una fuerte presencia de pequeños productores y de empresas familiares. Apoyar a estas estructuras, ayudarlas a innovar, a reforzar sus competencias y a producir de manera más sostenible son desafíos claves promovidos por el Objetivo 8.



Iniciativas regionales orientadas hacia la construcción de reglamentaciones económicas comunes

A principios de los años noventa, la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur) marcó un hito importante en el proyecto de construcción de normas económicas comunes en América del Sur. A raíz de esta iniciativa, la Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur Ampliado (COPROFAM) fue concebida como una palanca de cooperación en las temáticas de la agricultura familiar, campesina e indígena. Se formó como una red de federaciones nacionales, a su vez vinculadas a organizaciones y cooperativas locales, en contacto directo con pequeños productores rurales. Además de trabajar con los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), también ha admitido a Bolivia, Perú y Chile entre sus miembros. En la década del 2000, centró sus esfuerzos en actividades de promoción para defender los valores del cooperativismo y de la agricultura familiar a escala regional e internacional.

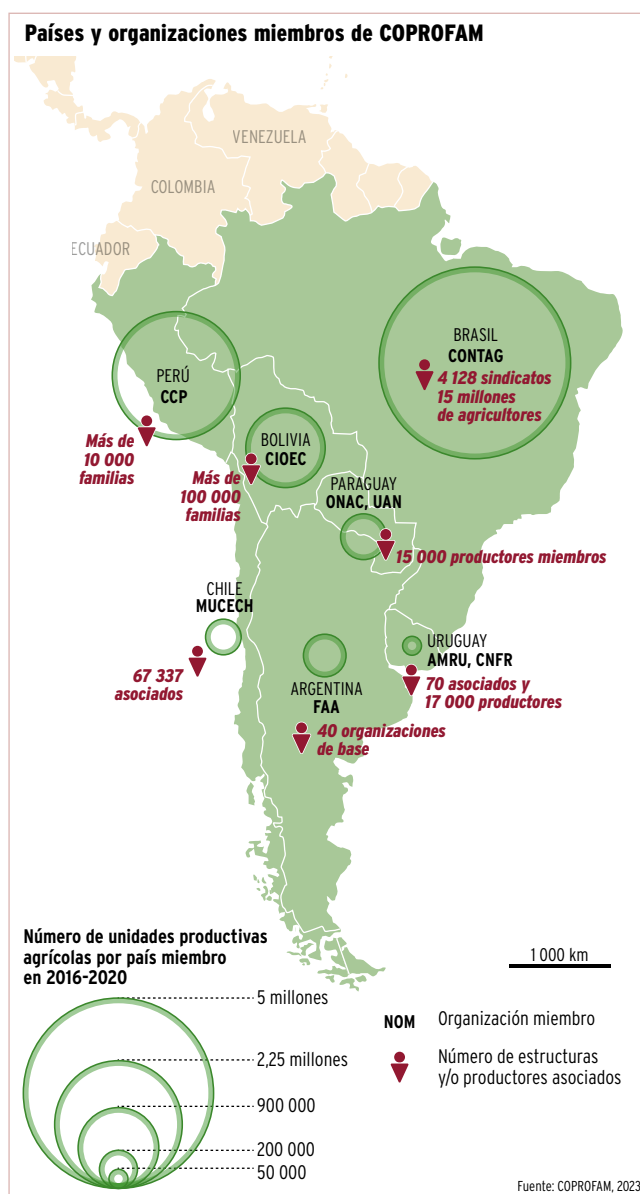


Apoyar el cooperativismo y el refuerzo de las competencias de los agricultores

Basándose en su experiencia, COPROFAM ha desarrollado gradualmente nuevas actividades y colaboraciones virtuosas con organizaciones más grandes, especialmente para financiar programas de formación para sus miembros. En 2019, gracias a una contribución financiera del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), y con el apoyo técnico del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), implementó una plataforma digital de aprendizaje, con un primer curso centrado en el cooperativismo y en técnicas de gestión asociativa o empresarial. En vez de interrumpir este impulso, la crisis sanitaria sólo lo ha reforzado, demostrando el valor de los módulos en línea, accesibles desde todos los países miembros –a condición de tener una conexión a Internet.

Los módulos, renovados durante varios años, han tenido un gran éxito con los agricultores y los líderes sociales de los movimientos campesinos. Han permitido a muchos empresarios reforzar sus competencias en temas esenciales para el desarrollo o la permanencia de su actividad, contribuyendo así a la consecución de las metas del indicador 8.3, sobre el apoyo a las estructuras pequeñas.

Con el tiempo, el modelo pedagógico también se ha mejorado y enriquecido: COPROFAM ha tenido mucho cuidado en adaptar su oferta formativa a las necesidades expresadas por los participantes, recogidas a través de encuestas de satisfacción. Después de la introducción con éxito de un curso sobre el liderazgo y las técnicas de promoción, ahora se está preparando para lanzar un módulo muy esperado sobre el uso de las redes sociales y de los nuevos medios de comunicación con fines comerciales. Desde el lanzamiento de la iniciativa, también vela por que se respete una regla de paridad en la selección de los alumnos, con el fin de garantizar a las mujeres el acceso a sus formaciones.



En América Latina, los **pequeños productores** representan entre el **45 y el 80 %** de todos los productores de alimentos, frente a menos del 10 % en Europa.

(Fuente: CEPAL, 2019)

Carlos Mermot trabaja para COPROFAM desde 2018. Coordina los proyectos de la organización y sus colaboraciones internacionales. Evocando la puesta a punto de las formaciones en línea recuerda: «Al principio no funcionaban bien». Explica que la dimensión de «autogestión» y la falta de vínculo con los estudiantes ocasionaron muchos fracasos y abandonos durante el primer intento de digitalización de la enseñanza en 2019. «A partir de la segunda temporada, incorporamos tutores, uno por país». Esta decisión, junto con el añadido de soportes más interactivos, en formatos audiovisuales, fueron cruciales para un mejor seguimiento de los participantes y para posibilitar que obtuvieran su diploma.



Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

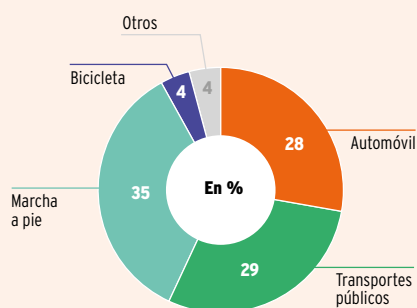
Con vías de comunicación deficientes durante mucho tiempo, las ciudades latinoamericanas han ido adoptando sistemas de transporte colectivo más eficientes desde los años 2000. Siguiendo el ejemplo de Curitiba (Brasil) y de Bogotá (Colombia), varias ciudades han acondicionado carriles dedicados a los autobuses rápidos (BRT, *bus rapid transit*). A semejanza de Medellín (Colombia), otras han optado por sistemas multimodales, conectados a los barrios populares periféricos por teleféricos. Pero la implementación de estas infraestructuras no ha sido suficiente para destronar al automóvil como el medio de transporte preferido por las clases medias y acomodadas, lo que frena la transición hacia movilidades más sostenibles.

El desafío de una movilidad urbana sostenible en América Latina y en Santiago (Chile)

En América Latina y el Caribe, la cuestión de la movilidad urbana sigue siendo un desafío para las autoridades locales y nacionales. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tres ciudades de la región (Bogotá, São Paulo y Ciudad de México) se encontraban entre las cinco ciudades más congestionadas del mundo en 2019. Sin llegar al nivel de congestión y de contaminación de sus homólogas, Santiago también se ha visto confrontada con problemas de movilidad, revelados por los disturbios urbanos de 2019. Si hoy en día es la capital de América Latina cuyos habitantes utilizan menos el automóvil para sus desplazamientos, es gracias a los esfuerzos conti-

nuos desplegados en las últimas dos décadas. Desde el año 2000, el municipio ha ido implementando un Plan de transportes urbanos (PTUS 2000), estructurado en torno a doce programas de modernización del transporte público. Uno de ellos llevó a la construcción del Transantiago, una red de transporte público multimodal e integrada compuesta por un metro, autobuses y trenes. Inaugurado en 2007, tuvo un comienzo difícil, pero sus progresos fueron rápidos. Una etapa decisiva y más reciente de su consolidación ha sido la electrificación de los autobuses. Actualmente, el 31 % de los autobuses que circulan en la ciudad son eléctricos, con el objetivo de las autoridades de alcanzar el 100 % para 2030. Con 200 autobuses eléctricos, Santiago ya cuenta con la mayor flota de América Latina y el Caribe.

Distribución modal de los transportes diarios en Santiago



Fuente: Rivas et alii, 2019.

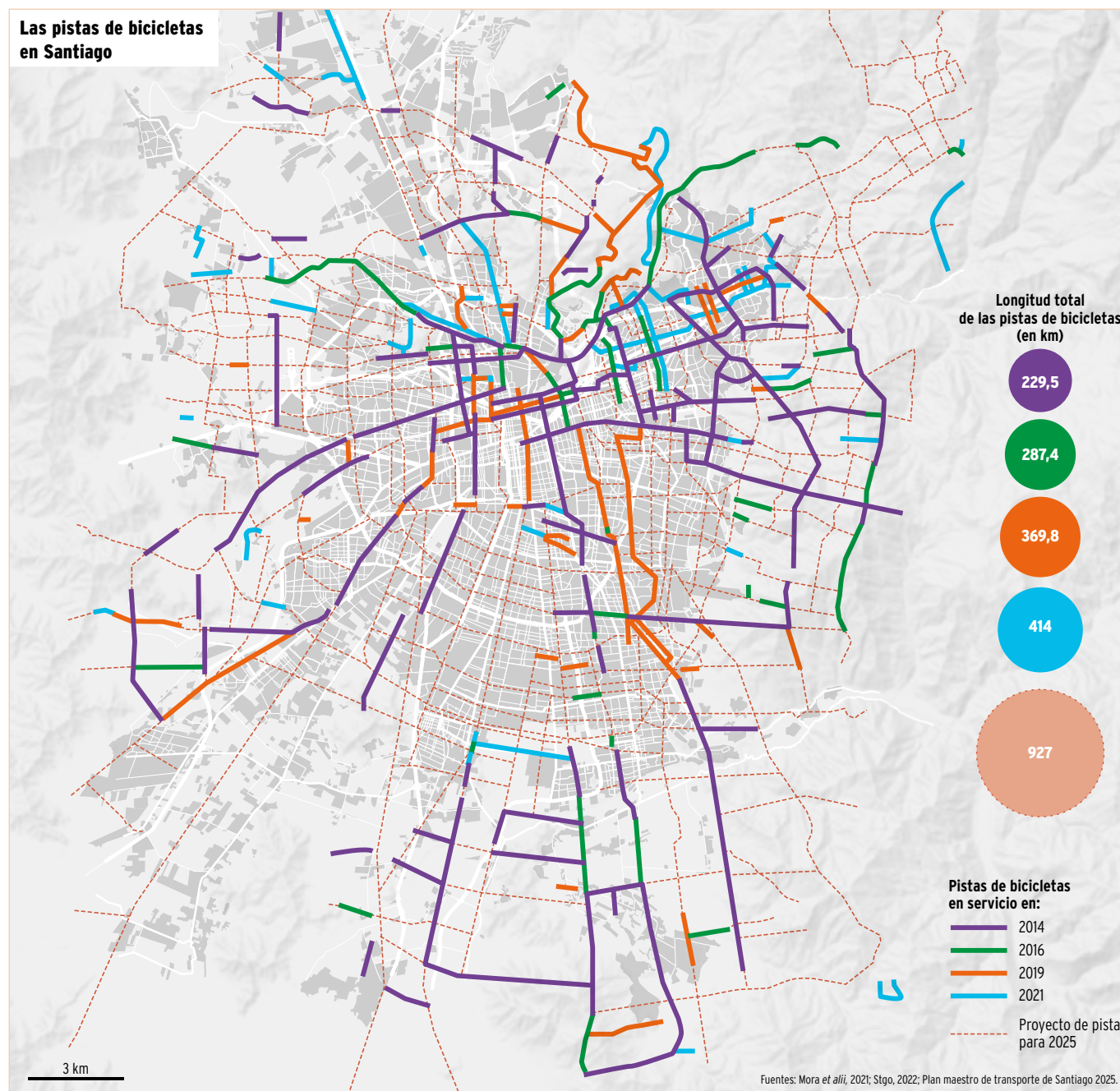
¿Una revolución ciclista en Chile?

En Chile, el éxito de la bicicleta y su creciente uso como modalidad de transporte diario también ha permitido enriquecer el debate público al hacer que se generaran nuevas propuestas y causas de movilización. A raíz de las manifestaciones de octubre de 2019 contra las desigualdades, colectivos ciclistas se comprometieron en la lucha social, dando lugar a un movimiento de «revolución ciclista plurinacional». Sus reivindicaciones en materia de reducción de las emisiones de carbono, de valoración de las movilidades activas y, sobre todo, de seguridad en la ciudad están alimentando ahora las reflexiones de la escena política chilena.

Bicicletas para los habitantes de Santiago

Uno de los últimos logros de la capital chilena en términos de movilidad inclusiva y sostenible ha sido fomentar el recurso a las bicicletas, gracias a la reestructuración de los espacios públicos y al acondicionamiento de carriles dedicados. Entre 2014 y 2019, la cobertura de pistas de bicicletas pasó de 229 a 369 km en el Área Metropolitana de Santiago (AMS), lo que conllevó un aumento en el transporte diario en bicicleta. Pasaron del 4 % del total de las movilidades diarias en 2015 al 7 % en 2020. Además de estos acondicionamientos públicos, las bicicletas también se han extendido gracias a la instalación de una red de 250 terminales de bicicletas en autoservicio en varios municipios de la AMS. Llamado Bike Santiago, este sistema fue

posible implementarlo gracias al establecimiento de una colaboración público-privada con el operador brasileño Tembici, este último asociado al banco Itaú, ya presente en otras ciudades del continente. Los usuarios de Santiago ya pueden contar con 3 500 bicicletas eléctricas, reconocibles por su color naranja y trazables gracias a una aplicación móvil dedicada. En 2023, el coste de un solo viaje (1 € para la primera hora) sigue siendo ligeramente superior al del Transantiago, pero la suscripción mensual (unos 6 €) ofrece una alternativa de movilidad muy ventajosa para las personas válidas. Tanto en Santiago como en otras ciudades del continente, los ciclistas militan por incitar a las autoridades a avanzar más en la exploración y la priorización de las movilidades activas.





Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

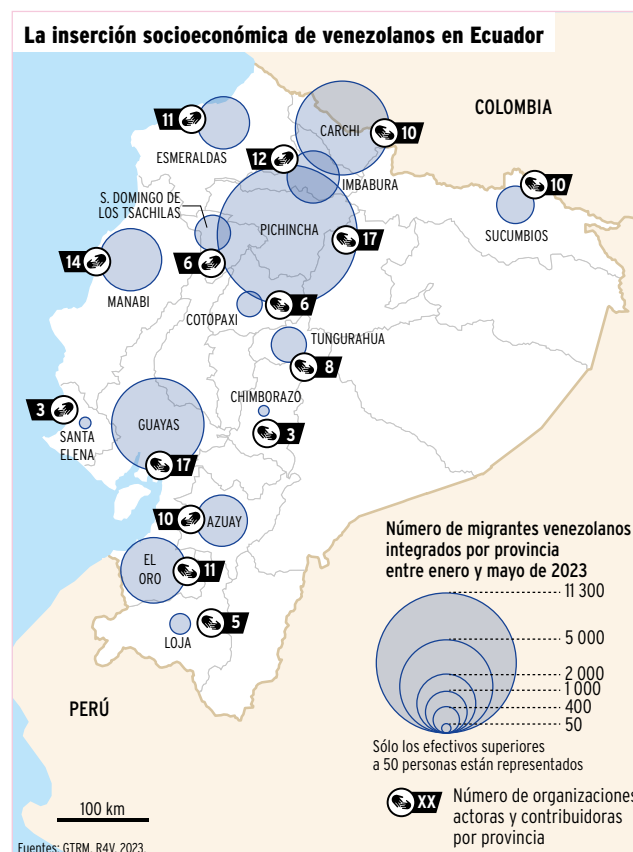
Las desigualdades representan un grave problema a nivel mundial. Son el principal obstáculo para lograr el desarrollo sostenible, y a menudo se ven exacerbadas por los flujos migratorios masivos causados por los conflictos políticos o los desastres ambientales.

Desigualdades y migraciones: los desafíos de la crisis venezolana

En Venezuela, la represión política y el deterioro de la situación económica desencadenaron un movimiento migratorio masivo, causando profundos cambios en América Latina y el Caribe. En una región en la que las tasas de desigualdades socioeconómicas ya superaban en un 30 % la media mundial, la llegada de casi 6,8 millones de refugiados venezolanos, a menudo en situación de vulnerabilidad, constituyó un auténtico desafío en términos de atención. Dentro de las sociedades de asilo, esta ola de migrantes a veces ha sido percibida como una amenaza, por lo que muchos ciudadanos venezolanos se han visto confrontados con reacciones de exclusión y de rechazo.

Una respuesta coordinada a escala regional

Dada la magnitud del fenómeno y sus repercusiones en términos de refuerzo de las desigualdades, los gobiernos y actores humanitarios de la región han trabajado para aportar ayuda a estas poblaciones. En 2018, se creó la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) para facilitar la articulación de sus esfuerzos. Esta plataforma, establecida bajo los auspicios de la Organización Internacional para las



En 2021, **15 000 venezolanos** estaban refugiados en Cuenca, en la provincia de Azuay. El **25 % de ellos** vivían en la calle.

(Fuente: Fundación Haciendo Panas, 2021)



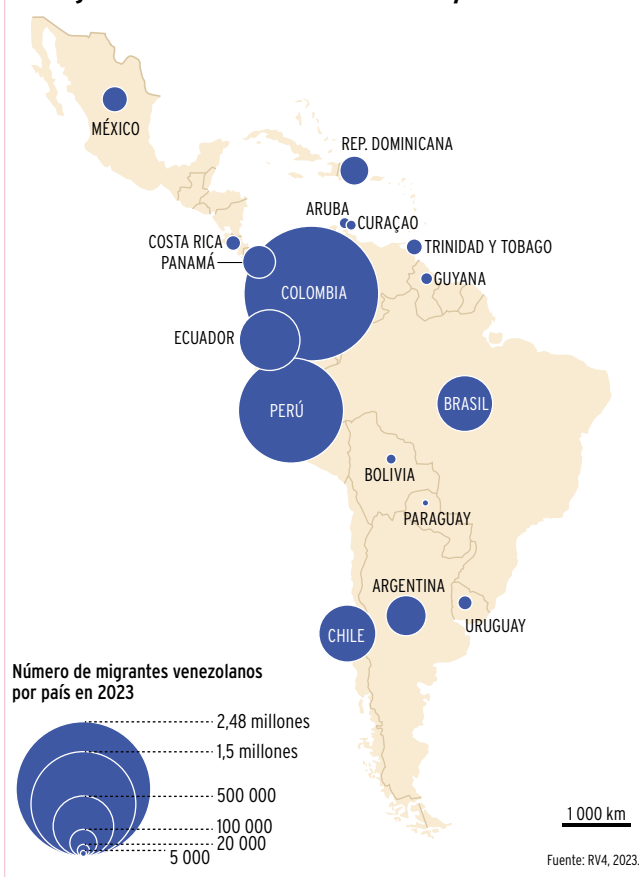
Migraciones (OIM) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha tenido el mérito de reunir las contribuciones de una amplia gama de actores gubernamentales y no gubernamentales, a nivel internacional y en 17 países de América Latina y el Caribe. En pocos meses, la R4V logró elaborar su Plan regional de respuesta para refugiados y migrantes. Esto dio lugar a la definición de tres ejes prioritarios de intervención: la construcción de una respuesta humanitaria coordinada a las necesidades de los refugiados y de los migrantes venezolanos, la promoción de su integración socioeconómica en las comunidades de acogida y el refuerzo de la protección de sus derechos fundamentales.

Para acompañar la aplicación de políticas y de medidas concretas, la R4V se desplegó a través de plataformas nacionales dedicadas en los principales países de asilo (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú), así como en entidades de coordinación plurinacionales en el Caribe, en América Central, en México y a nivel del Cono Sur.

Ecuador, un actor clave en el R4V

Con la atención a 11 417 venezolanos entre enero y marzo de 2023, Ecuador se ha convertido en un actor modelo en la implementación del Plan regional de respuesta para refugiados y migrantes. La creación del Grupo de Trabajo de Integración Social y Económica (GISE) ha sido una de las medidas claves adoptadas para facilitar la acogida de las personas. Ha permitido gestionar eficazmente los flujos migratorios distribuyendo a las personas recién llegadas en las diferentes provincias y descentralizando el seguimiento de estas poblaciones. En todo el país, el proceso de integración se ha materializado en medidas para la integración económica de las personas y su acceso a las oportunidades de empleo. El GISE también ha establecido redes de apoyo y espacios de participación para las poblaciones refugiadas, promoviendo el establecimiento de un diálogo pacífico y nutrido con las comunidades locales. Esos esfuerzos han tenido un impacto deci-

Los migrantes venezolanos en América Latina y el Caribe



sivo sobre la cohesión social y la inclusión de los venezolanos en sus sociedades de acogida. Una de las claves del éxito del modelo ecuatoriano ha sido movilizar en torno al GISE a un amplio abanico de actores civiles, gubernamentales e internacionales, que han contribuido activamente al esfuerzo de inclusión. La colaboración de 26 socios, entre ellos, ONG locales como la fundación Hacienda Pana, ha permitido llevar a cabo acciones diversas e integradas en todo el país y a varios niveles de gobernanza.

🕒 **La fundación Hacienda Panas** es uno de los socios claves del GISE. La ONG fue fundada en 2018 para ofrecer a los migrantes venezolanos espacios de sociabilidad. Con sede en Cuenca, trata de ayudar a los refugiados en situación irregular instalados en la región. Ya ha conseguido preparar a un gran número de ellos para su entrada en el mercado laboral. También ha trabajado por el diálogo intercultural, una garantía de convivencia pacífica entre las comunidades.

“ América Latina no es el continente más pobre, pero quizás sea el más injusto.

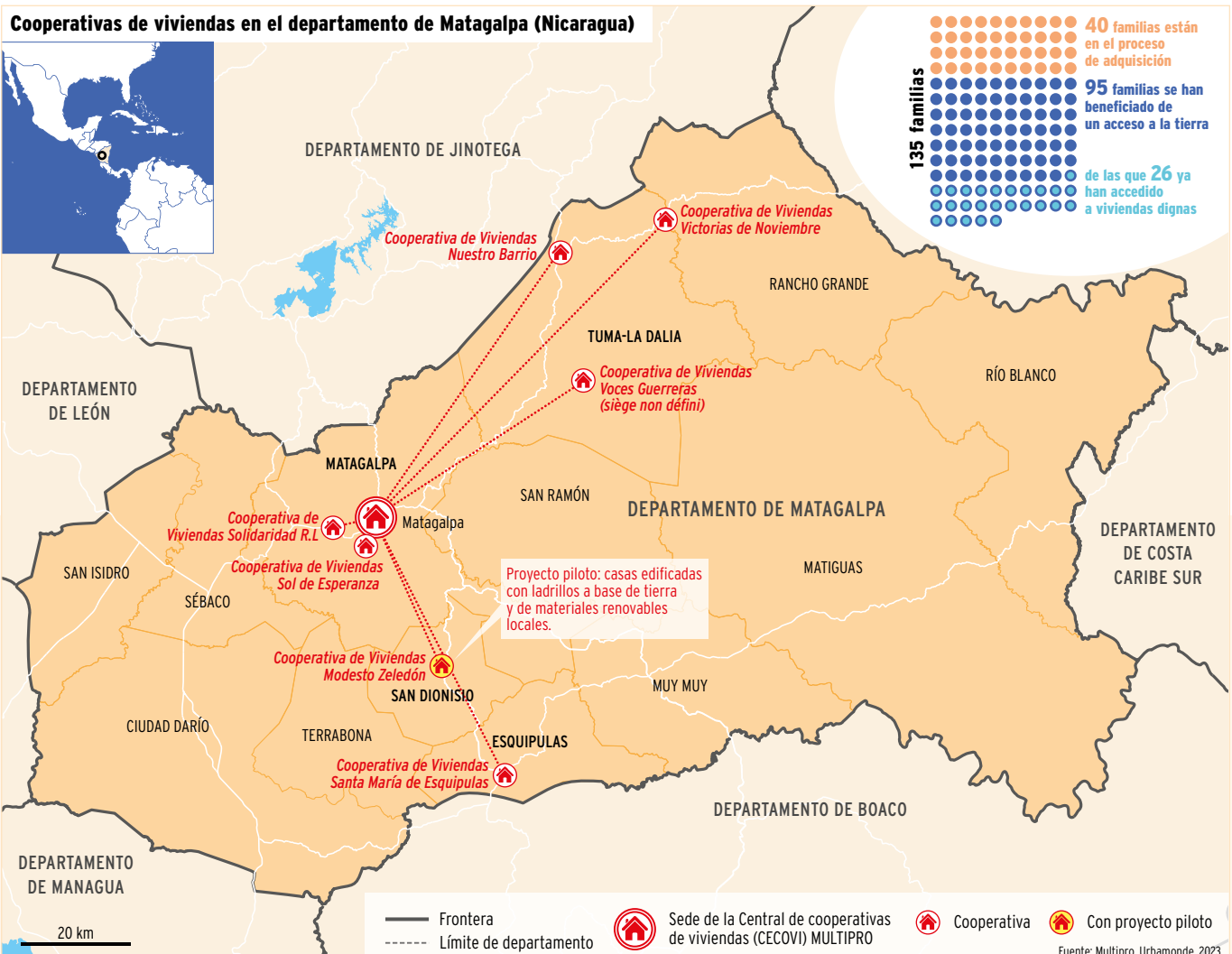
RICARDO LAGOS, ANTIGUO PRESIDENTE DE CHILE, EN LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS DE 2004

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES



Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Desde los años setenta y la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat I), el interés de la comunidad internacional por los desafíos urbanos no ha dejado de crecer. De hecho, las ciudades constituyen espacios estratégicos para el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. Hoy en día, más de la mitad de la humanidad se concentra en las ciudades y las previsiones estiman que en 2050 la tasa de urbanización en el mundo será del 70 %.




El hábitat colaborativo: una práctica arraigada desde hace mucho tiempo en América Latina

En América Latina y el Caribe, la barra del 80 % de ciudadanos ya ha sido superada y numerosas ciudades se ven confrontadas con problemáticas graves de hábitat precario o de déficit de viviendas. Sin embargo, históricamente, la región ha sido un terreno propicio para el desarrollo de soluciones creativas en materia urbana y de vivienda, con una antigua tradición de construcción por ayuda mutua. En Uruguay, el trabajo pionero realizado en los años sesenta por las primeras cooperativas de viviendas permitió que el hábitat cooperativo adquiriera reconocimiento y emergiera como una solución convincente. Al contrario de las iniciativas de producción masiva y estandarizada de viviendas, bastante populares en ciertos Estados latinoamericanos y generalmente poco preocupadas por las necesidades reales de las poblaciones objetivo, este modelo ofrecía a las familias vulnerables la posibilidad de retomar las riendas de su proyecto de hábitat y de acceder a viviendas dignas adaptadas a sus modos de vida. Agrupados en el seno de una organización paraguas, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), los movimientos sociales de hábitat y sus socios internacionales también han trabajado para difundir sus ideas y saber hacer, que poco a poco han conseguido llegar a otros países de la región y del mundo.

La experiencia de las cooperativas de viviendas en Nicaragua

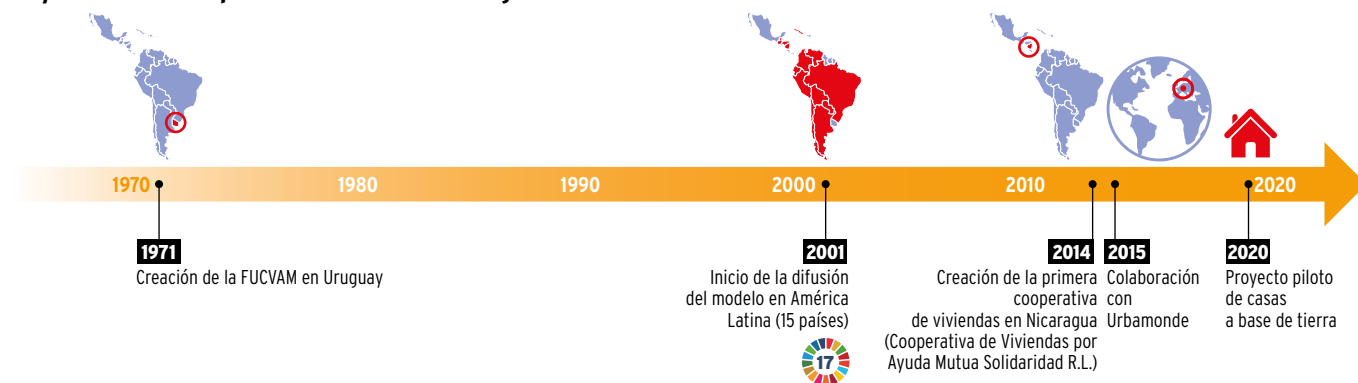
En Nicaragua, en uno de los departamentos más poblados y urbanizados, Matagalpa, las movilizaciones civiles y asociativas a mediados de los años 2010 dieron origen a las primeras cooperativas de viviendas. Con el acompañamiento de la FUCVAM, se dieron la misión de proponer soluciones de vivienda digna a familias con ingresos

○ Ayuda mutua y producción de viviendas. En América Latina, las modalidades de construcción de viviendas por ayuda mutua están arraigadas en una antigua tradición de ayuda mutua dentro de las comunidades indígenas. En numerosos países, todavía se hace referencia a ellas utilizando términos derivados de las lenguas quechua y tupi-guaraní: «minga» en español y «mutirão» en portugués. Este último, por ejemplo, dio su nombre a varios programas gubernamentales de vivienda en Brasil.

modestos. Desde 2014, se han beneficiado del apoyo de Urbamonde, una ONG franco-suiza especializada en el hábitat cooperativo, que les ha ayudado a estructurarse. Los fondos de cooperación internacional canalizados por esta organización también han sido de gran interés en el proceso. Se han empleado en pagar los servicios de la cooperativa de profesionales MultiPro, que se ha consolidado como un socio local clave en la ejecución de los proyectos. Este actor, con experiencia en ayuda mutua y apoyo a las pequeñas estructuras, ha acompañado a las cooperativas desde la fase de formación de los grupos solidarios de habitantes. También los ha acompañado en su iniciación en las estrategias de ahorro (individual y colectivo) con el fin de financiar la compra de terrenos y materiales, luego en su aprendizaje y en su formación sobre técnicas de construcción. Con la preocupación de su impacto en las desigualdades de género y de la inserción de las mujeres, ha velado por que las mujeres tengan un rol central en los grupos de ahorradores y en la realización de los proyectos de construcción. 

Alentados por el éxito de las experimentaciones realizadas hasta ahora, MultiPro, Urbamonde y las cooperativas de Matagalpa siguen trabajando codo con codo para promover soluciones de viviendas dignas y sostenibles.

Trayectoria de las cooperativas de viviendas nicaragüenses

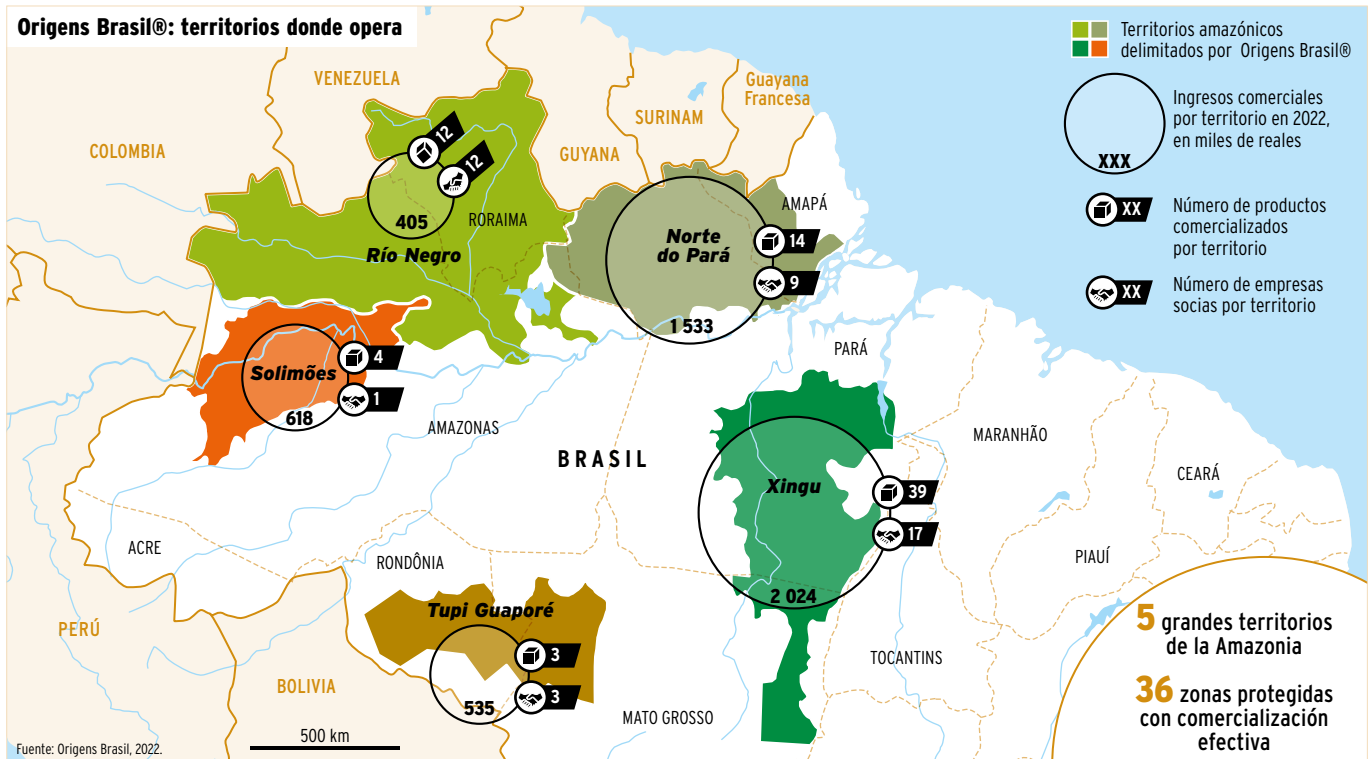


Fuentes: FUCVAM, Building and Social Housing Foundation, Urbamonde.



Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Ante el cambio climático y la necesidad de adoptar comportamientos más responsables desde el punto de vista ecológico a escala mundial, la construcción de modos de consumo y de producción más sostenibles representa un desafío esencial. El ODS 12 destaca la importancia del compromiso colectivo de los gobiernos, del sector privado y de la sociedad civil.



El Fondo Amazonia

Fue creado en 2008 por el gobierno federal brasileño para conseguir recursos internacionales destinados a financiar actividades de prevención y de lucha contra la deforestación en la región amazónica. Administrado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), sus principales donantes son los gobiernos de Noruega y de Alemania, así como la compañía petrolera Petrobras. A pesar de la parálisis por la suspensión de sus órganos de gobernanza en junio de 2019, ha seguido desarrollando ciertas actividades. Ha sido relanzado en 2023 con el regreso al poder del presidente Lula.



3328 productores
inscritos en la red



35 empresas miembros
que comercializan los productos

Modos de consumo y de producción que repercuten en la biosfera

La región América Latina y el Caribe, en comparación con otras regiones del mundo, como Europa o el Sudeste Asiático, se caracteriza por una huella ecológica relativamente pequeña. No obstante, ciertos de sus Estados más poblados figuran individualmente bastante alto en los rankings de países donde el consumo humano tiene más impacto en la biosfera. Según datos de Global Footprint Network, Brasil se situaba en el sexto lugar en 2018, no muy lejos de China, Estados Unidos y la India. Pero a diferencia de estos últimos, compensaba su huella «bruta» con la disponibilidad de tierras productivas y recursos naturales, capaces de absorber parte de sus emisiones de carbono. No obstante, esta importante «biocapacidad», que la distinguía de otros países de la región —México, entre otros— o del mundo, se ha cuestionado en los últimos años, particularmente con respecto al impacto de las degradaciones que sufre la selva amazónica. Si bien a los científicos les resulta difícil medir los efectos de estos cambios, la creación de mecanismos de preservación de los recursos naturales resulta ser un desafío complementario a la construcción de modos de producción y de consumo más sostenibles.

Combinar la producción sostenible y la conservación en la región amazónica

La etiqueta Origenes Brasil® ha sido capaz de combinar esta doble perspectiva. Fue creada en 2016 y apoyada en parte por el Fondo Amazonia, una palanca brasileña para financiar iniciativas virtuosas en la región de la cuenca amazónica. Al constituir una red de pequeños productores locales, de empresas y de organizaciones comunitarias que representan a los pueblos indígenas, ha trabajado por la puesta en circulación de productos de origen natural y ético,



58 millones de hectáreas de selva conservadas

por los pueblos indígenas y las poblaciones tradicionales

fácilmente identificables y trazables para el consumidor. La página web de la organización muestra con orgullo las «historias» detrás de cada producto, valorizando los procesos de extracción o de fabricación y sus actores. Un sistema de códigos QR colocados sobre los productos también permite acceder a estos contenidos desde su lugar de distribución física.

La etiqueta no se contenta con promover prácticas de producción y de consumo sostenibles, sino que también ha apostado por combinar la producción y la conservación, concentrando sus esfuerzos en actores y territorios claves en materia de preservación de la biodiversidad. Enfocada esencialmente en los empresarios, el saber hacer y las materias primas de la cuenca amazónica, se ha afirmado como una palanca para generar valor al servicio de las economías locales y del refuerzo de las capacidades de los defensores y de los habitantes tradicionales de la selva. Las colaboraciones equitativas con firmas nacionales diversas y emblemáticas —célebres creadores de sandalias de playa o cadenas de supermercados— han permitido a estos empresarios-defensores aumentar y estabilizar sus ingresos, mientras siguen teniendo un impacto ambiental positivo. Origenes Brasil®, recompensada en 2019 con el Premio internacional a la innovación para la alimentación y la agricultura sostenibles, no ha dejado de ampliar su lista de productos y de colaboraciones desde su creación —a pesar de la parálisis del Fondo Amazonas bajo el gobierno de Bolsonaro.





Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

El cambio climático afecta de manera desigual a las diferentes regiones del mundo. Si bien los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe no se encuentran entre los principales emisores de gases de efecto invernadero (GEI), están en primera línea frente a fenómenos meteorológicos extremos (huracanes, sequías, lluvias torrenciales) y a la subida de las aguas. De aquí a 2100, un país como Cuba, responsable del 0,08 % de las emisiones globales de GEI, podría perder el 10 % de su territorio por la subida de las aguas. La resiliencia climática se impone actualmente como una prioridad y una urgencia en la región.



Trastornos ecológicos en Cuba

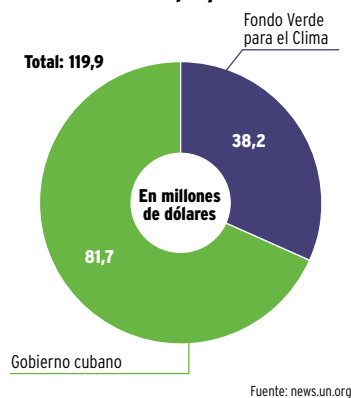
En Cuba, la subida de las aguas no es la única amenaza para las sociedades humanas y los ecosistemas. Históricamente, la adopción de un modelo económico agroexportador basado especialmente en la industria azucarera tuvo un impacto devastador en el medio ambiente. Como consecuencia directa de las actividades agrícolas, el suelo cubano se volvió fuertemente acidificado y la búsqueda de nuevos espacios cultivables favoreció las prácticas de deforestación. Ya en 1959, en el momento de la revolución, la cubierta forestal de la isla era de sólo el 14 %, en comparación con el 41 % de a principios del siglo XX. Y si bien a partir de esa fecha el Estado cubano ha estado trabajando por la reforestación de su territorio, estos trastornos ecológicos han debilitado y trastornado los ecosistemas. En toda la isla, los científicos han observado una fuerte reducción de la diversidad de las especies locales, a favor de especies invasoras como el marabú.

Esta planta, originaria de Sudáfrica, se ha propagado extensamente en Cuba, invadiendo tanto tierras agrícolas abandonadas como reservas naturales protegidas. Actualmente cubre casi 1,7 millones de hectáreas, o sea, más del 10 % de la superficie total del país (10,99 millones de hectáreas). Compite con las especies autóctonas y cultivadas, además de representar un obstáculo a nivel agrícola para la cosecha de ciertos frutos y para el mantenimiento de los bosques.

Fomentar las prácticas agrícolas sostenibles para restaurar los ecosistemas



En 2017, el gobierno cubano anunció el lanzamiento de Tarea Vida, una política ecológica de planificación sobre cien años dirigida a reforzar la capacidad de los actores cubanos para superar el impacto del cambio climático y de las perturbaciones ecosistémicas. Para apoyar sus esfuerzos, la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo Verde para el Clima de la ONU decidieron

Financiamiento del proyecto



contribuir a la aplicación de este plan financiando un proyecto a gran escala, centrado en gran medida en la lucha contra la expansión del marabú. Titulado «Incremento de la resiliencia climática de los hogares y comunidades rurales a través de la rehabilitación de paisajes productivos en localidades seleccionadas de la República de Cuba» (IRES), está centrado en la educación y en la sensibilización como palancas para el cambio.

Sus actividades de formación están dirigidas tanto a los funcionarios del Ministerio de Agricultura, implicado en la ejecución del proyecto, como a los agricultores de las 35 000 hectáreas de tierras seleccionadas. Entre los pequeños agricultores de las comunidades rurales, los protagonistas de la iniciativa principalmente han centrado su trabajo de sensibilización y de formación en la introducción de técnicas silvopastoriles, es decir, basadas en el restablecimiento de equilibrios entre las actividades agrícolas y los ecosistemas forestales.

Al final, el IRES debería posibilitar el refuerzo significativo de la resiliencia agrícola en Cuba y la rehabilitación de 15 544 hectáreas de tierras actualmente invadidas por el marabú. El programa se ha distinguido por su enfoque sensible al género  y a la generación de oportunidades profesionales para las poblaciones rurales con ingresos bajos .

Objetivos del proyecto



Desarraigo del marabú

Objetivo 2022 **100 hectáreas**
Realizado **184 hectáreas**

Objetivo 2023 (intermedio) **600 hectáreas**

Objetivo final (2027) **Recuperar 15 544 hectáreas de tierras cubiertas de marabú**



Número de campesinos formados

2022 **300**

Objetivo 2023 (intermedio) **9 882**
4 615 son mujeres

Objetivo final (2027) **15 549**
7 774 son mujeres



El **marabú** es un arbusto leñoso cubierto de espinas que puede alcanzar de ocho a diez metros de altura.

Fuentes: FAO-IRES, 2023.



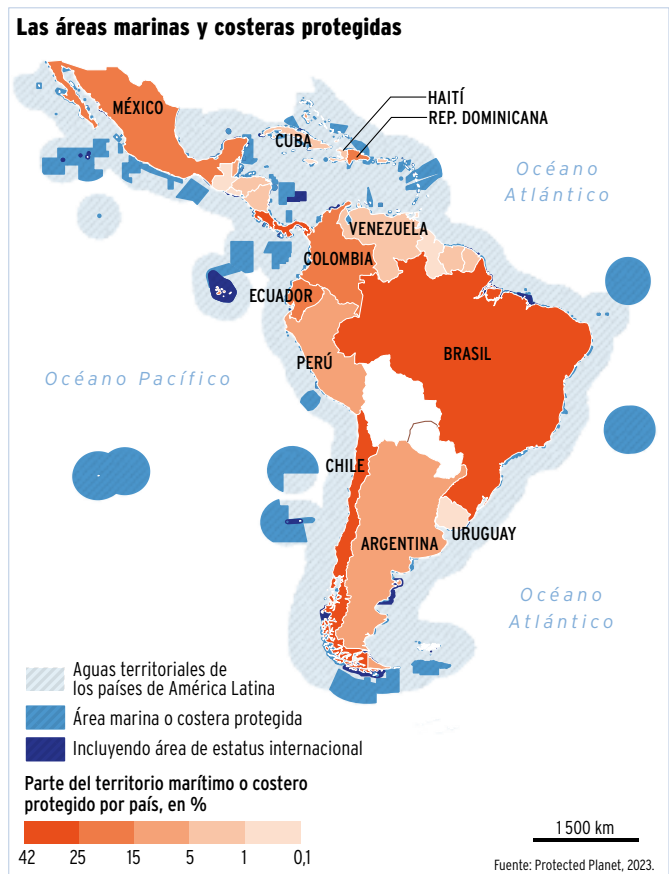
Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

Los ecosistemas marinos desempeñan un papel fundamental en el equilibrio climático del planeta: verdaderas «bombas de carbono», absorben cada año entre el 25 y el 30 % de las emisiones de CO₂ sobre la Tierra, lo que limita enormemente las emisiones a la atmósfera y la producción de calor.

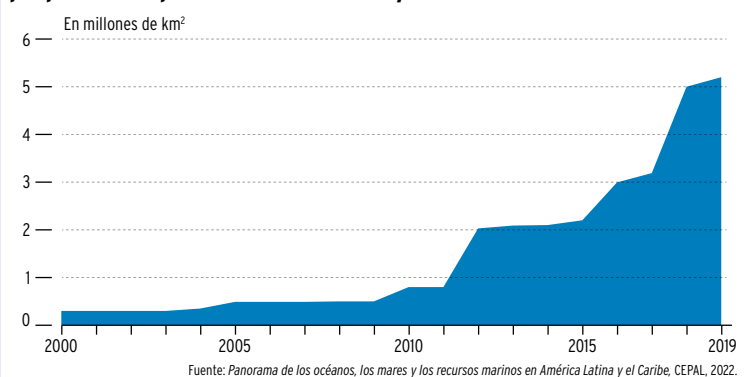
Convertir en santuarios áreas marinas y costeras sensibles

La delimitación de las áreas marinas protegidas constituye una de las palancas más eficaces al servicio de los Estados en la lucha por la preservación de los océanos y de la rica biodiversidad que albergan. En 2010, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de Aichi contribuyó a llamar la atención internacional sobre este tema, fijando un objetivo de salvaguardia del 10 % para las zonas marinas y costeras para 2020, a escala del planeta.

En América Latina y el Caribe, este umbral se ha alcanzado en gran medida: entre 2010 y 2019, la superficie protegida pasó de menos de un millón a más de 5 millones de kilómetros cuadrados, con una cobertura total de alrededor del 24,44 %. Este margen de progreso, que coloca a la región en una posición bastante buena a nivel mundial, también refleja los importantes esfuerzos realizados por los



Avances en la protección de las áreas marinas y costeras por parte de los países de América Latina y el Caribe



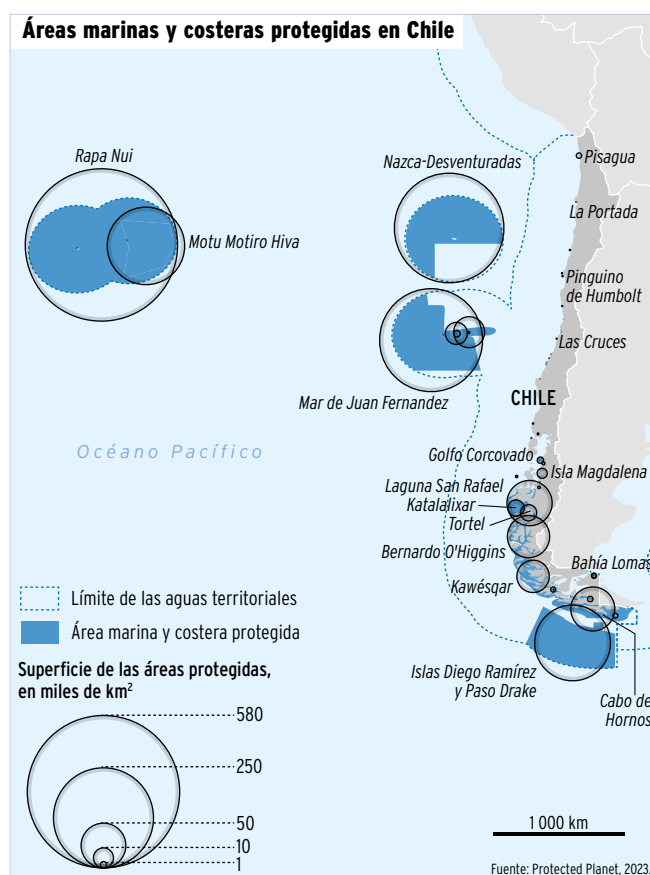
73 500 hectáreas: la superficie cubierta por el régimen de protección de la Bahía de Pisagua

gobiernos nacionales. A veces respaldados por ONG internacionales o redes como el Fondo mundial para la naturaleza (WWF), Oceana o la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ciertos Estados han trabajado, a nivel jurídico, para la delimitación de nuevas áreas de protección en sus zonas marítimas, estableciendo mecanismos efectivos de control y de vigilancia de los nuevos espacios convertidos en santuarios.

Chile, un Estado proactivo en materia de protección marina

En este ámbito, Costa Rica, México, Brasil y Chile se han posicionado como los mejores alumnos, destacando este último con bastante claridad con el 41,53 % de sus zonas marinas y costeras protegidas, según datos de la ONG Protected Planet (2020). La buena salud y la productividad de los océanos representan grandes desafíos para este Estado, que es uno de los mayores pescadores del mundo. Pero tanto en Chile, como en numerosos países de la región, las actividades pesqueras son un recurso crucial para la economía y la seguridad alimentaria de las poblaciones con ingresos bajos situadas al borde del mar.

En enero de 2023, el gobierno chileno ha aprobado la creación de una nueva zona de protección en la Bahía de Pisagua, en el norte del país. Esta decisión se produce tras la movilización de investigadores de la Universidad Arturo Prat y de expertos de la ONG Oceana, cuyos trabajos y cuyas expediciones en la región de Pisagua, realizados antes de que fuera declarada zona protegida, revelaron su riqueza en términos de biodiversidad marina. Según estos especialistas, la bahía desempeña un papel esencial en el ecosistema del Pacífico Sur porque es un lugar de alta concentración de microorganismos y de reproducción de especies (peces, aves y mamíferos). Los resultados de estas investigaciones también destacaron la gestión responsable de los recursos naturales locales por parte de los pescadores de Pisagua, teniendo en cuenta las cantidades y los tipos de peces capturados.

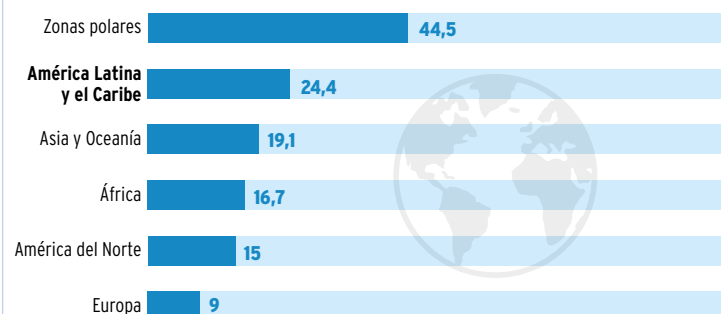


Con el fin de reconocer estos comportamientos virtuosos y de permitir que las comunidades locales continúen sus actividades, el gobierno chileno ha decidido incorporar las prácticas locales de pesca artesanal al régimen de protección de la bahía. El estatus de área marina costera protegida de múltiples usos ha permitido establecer una forma de santuario que toma en cuenta tanto la biodiversidad como las economías locales. Esta innovación en materia de definición de las áreas marinas protegidas podría servir de modelo para otros experimentos del mismo tipo, a nivel nacional y más allá de las fronteras chilenas.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica es un mecanismo internacional que surgió en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en 1992. En 2010, en una reunión celebrada en Aichi (Japón), su órgano rector, la Conferencia de las Partes, adoptó un plan estratégico que contenía una serie de objetivos [los «Objetivos de Aichi»]. El indicador 14.5 sobre la protección de las áreas marinas al que se hace referencia aquí tiene que ver con el objetivo 11 adoptado por el Convenio.

La protección de las áreas marinas en el mundo

Parte de áreas marinas protegidas en relación con el total de áreas marinas, en %



Fuente: Protected Planet, 2023.



La conservación de los bosques constituye uno de los grandes desafíos para la implementación del ODS 15 en América Latina y el Caribe, ante la alarmante reducción de la superficie boscosa a escala del subcontinente.

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

El azote de la deforestación en América Latina y el Caribe

Según las estimaciones de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se pierden 2,6 millones de hectáreas forestales al año, en gran parte como resultado de prácticas humanas, especialmente las relacionadas con actividades de ganadería intensiva. Según estudios realizados por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), el sector agrícola sería responsable de al menos el 84 % de la deforestación observada en la Amazonia desde 1985. La COICA, activa en los frentes de la vigilancia y de la lucha contra las prácticas de deforestación, también se encuentra en primera línea en la defensa de las comunidades indígenas locales. Estas últimas se ven duramente afectadas por la degradación de los ecosistemas que constituyen su hábitat. Sus tierras son codiciadas, los Estados les brindan una débil protección, con lo que están expuestas a múltiples violaciones de sus derechos.

Valorizar el trabajo de conservación realizado por las comunidades indígenas amazónicas

Aun así, la presencia de estas comunidades constituye un elemento clave en la protección de los recursos naturales locales. No sólo ejercen un rol de vigilancia, sino que han establecido modos de

producción y de consumo que les permiten vivir en armonía con la naturaleza que les rodea. 🌍

En Bolivia, uno de los Estados latinoamericanos más afectados por la deforestación, las autoridades locales de la región de Alto Beni han comprendido bien el importante papel que desempeñan estos actores y la necesidad de incluirlos en la protección y la gestión de los ecosistemas forestales. Las negociaciones llevadas a cabo a lo largo de 2022 bajo los auspicios de la ONG Conservación Internacional han permitido la elaboración de un decreto municipal que ratifica la creación de un área protegida de casi 40 000 hectáreas en este territorio amazónico de alto valor ecológico. A la espera de certificaciones nacionales e internacionales, este decreto establece una distinción entre dos tipos de espacios: «parques naturales» y «áreas naturales de manejo integrado». Si bien el primer tipo propone un modelo bastante clásico de protección con la forma de santuario, el segundo se basa en un principio más innovador de gestión comunitaria de las áreas protegidas. Este mecanismo, presente en la Constitución de Bolivia, tiene la ventaja de valorizar la participación activa de los pueblos indígenas en la conservación de los recursos naturales, al tiempo que les permite desarrollar actividades económicas y productivas sostenibles. El acuerdo alcanzado en la región de Alto Beni, por ejemplo, tiene como objetivo fomentar los sistemas agroforestales, en particular, la práctica responsable de la apicultura y la piscicultura.

Intentos internacionales de protección de las zonas forestales en América Latina y el Caribe

- Cubierta forestal
- Zonas afectadas por la deforestación entre 2000 y 2020
- Reforestación entre 2000 y 2012
- Límite de la Amazonia
- Zona natural inscrita en la lista del patrimonio mundial de la Unesco
- Con zona forestal
- Parq. nac. = parque nacional



Fuentes: Global Forest Watch; GLAD, Global Forest Change; Unesco; RAISG.



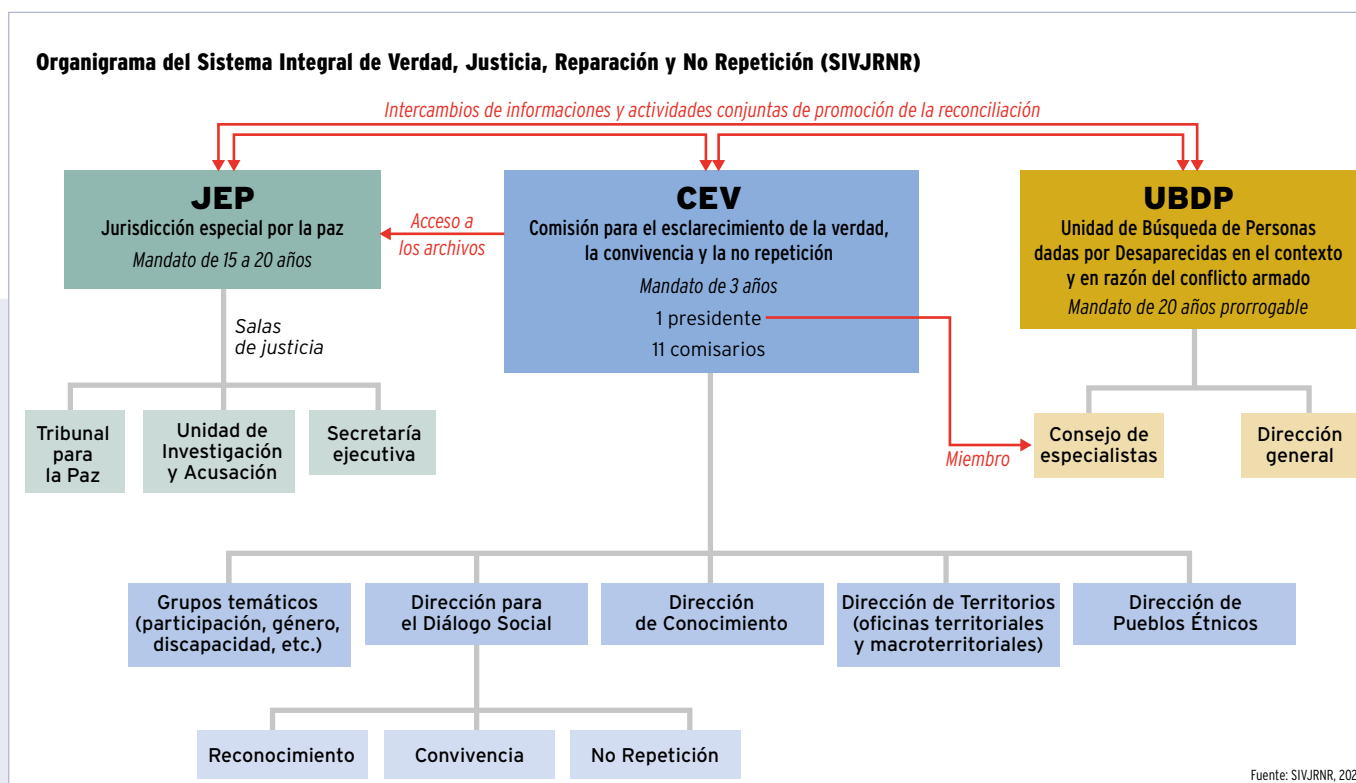
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible

A pesar de la relativa estabilidad de sus instituciones, la región de América Latina y el Caribe ha experimentado numerosas crisis políticas y situaciones de violencia en las últimas décadas. Desde la represión militar ejercida por ciertos Estados hasta los enfrentamientos territoriales entre grupos rivales, la violencia se ha impuesto como una realidad cotidiana latente en muchas sociedades, socavando el pacto social y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. El ODS 16 recuerda que el respeto de los derechos humanos y la presencia de un Estado de derecho son un requisito previo necesario para lograr el desarrollo sostenible.

Colombia: la paz ¿y después?

En Colombia, la firma en 2016 de un acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) debía poner fin a una guerra total, brutal y de múltiples actores. No obstante, el proceso de negociación, que se llevó a cabo a puertas cerradas en La Habana, generó controversia en el país, ya que se producía después de una larga y traumática trayectoria de discusiones abortadas, de desmovilizaciones fallidas

y de impunidad. Afligida por estas experiencias y por medio siglo de conflicto, la sociedad colombiana depositaba grandes esperanzas en el restablecimiento de un principio de justicia basado en el reconocimiento de los crímenes cometidos. En este contexto, y con miras a fomentar la reconciliación entre las diversas partes interesadas y las víctimas del conflicto, los arquitectos del proceso de paz instituyeron un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJNR). Este último, articulado en torno



a tres entidades públicas autónomas *ad hoc*, ha sido incorporado directamente a la Constitución. En el centro de este dispositivo, la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición (CEV), conocida como Comisión de la verdad, estuvo particularmente atenta a los desafíos de desarrollo sostenible y pudo aplicar un enfoque muy afinado de las problemáticas del conflicto armado.

La CEV: un mandato ejemplar para una entidad fuera de lo común

La CEV, creada por el decreto 588 de 2017 y disuelta tras la finalización de su mandato a principios de 2023, tenía por misión contribuir a la identificación, la caracterización y la explicación de las violaciones cometidas en el contexto del conflicto armado, con miras a construir un discurso común y a promover la reconciliación. Estuvo dirigida por once comisarios elegidos entre personalidades emblemáticas de la construcción de la paz. Adoptó un enfoque decididamente territorial, con un despliegue institucional y humano colosal en los departamentos colombianos. Sensible a la cuestión migratoria, también extendió su presencia más allá de las fronteras, en las principales tierras de exilio de los refugiados del conflicto. Por último, desarrolló una comprensión muy afinada del impacto diferenciado de la violencia en grupos de población caracterizados por la posesión de uno o más factores de vulnerabilidad, correspondientes a ciertos de los grandes desafíos de la Agenda 2030: etnia, identidad sexual y de género, edad y discapacidad.

Basados en más de 28 604 testimonios e innumerables documentos de archivos, los catorce volúmenes del informe final presentado por la CEV en 2022 brillan por su nivel de precisión pero también por su accesibilidad. De hecho, cada capítulo está acompañado por un gran número de soportes didácticos y de herramientas interactivas para que el público colombiano pueda apropiarse los resultados de esta considerable investigación.

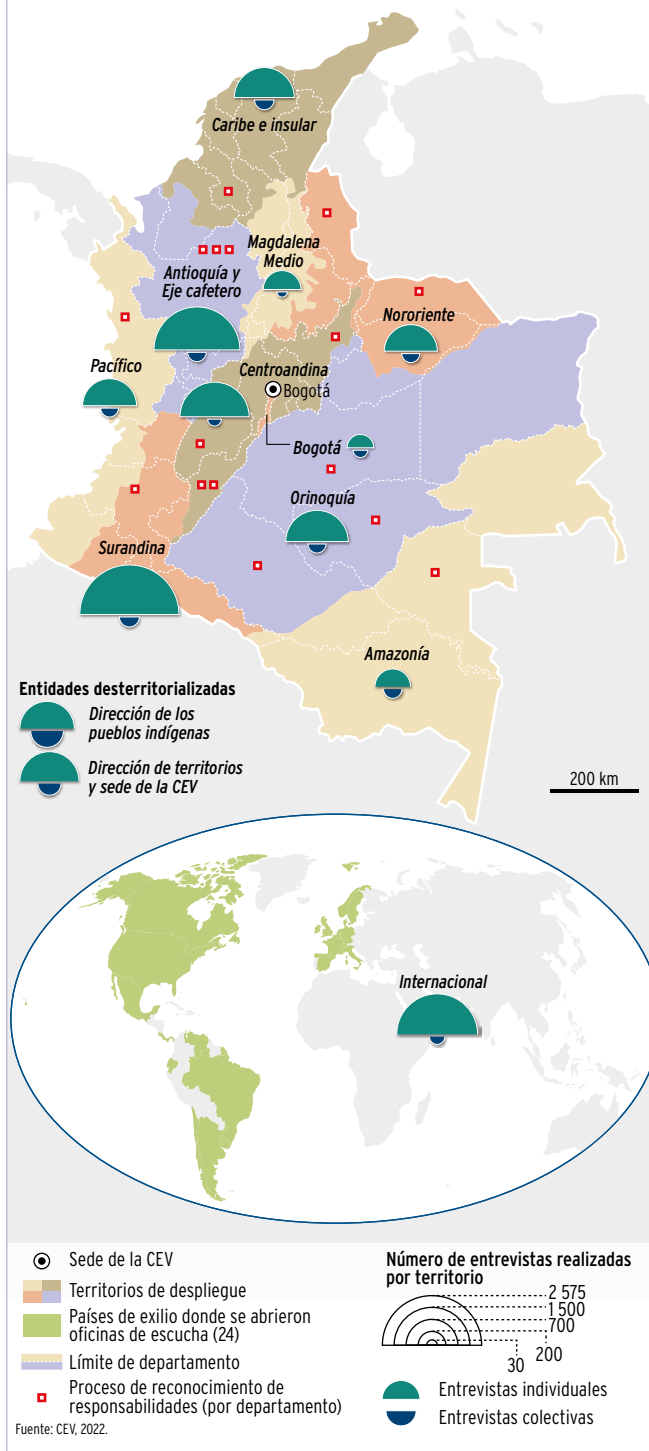
 **28 604**
personas
escuchadas


14 956
entrevistas individuales
y colectivas realizadas


1 244 informes, **670** casos
y miles de documentos
de archivos judiciales consultados

Fuente: CEV, 2022.

El enfoque territorial de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición (CEV)





Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Las investigaciones han demostrado que los regímenes democráticos son más eficaces que los gobiernos autoritarios en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El diálogo social permite que numerosas partes interesadas participen en la preparación de las tomas de decisiones. Además, consolida la legitimidad de los ODS y facilita su implementación. El diálogo social también es un objetivo perseguido indirectamente por varios ODS (8, 10 y 16).



Contexto regional

El mecanismo de participación de la sociedad civil en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue lanzado por el Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible en México en 2017.

Desde entonces, las declaraciones adoptadas en los foros evocan el carácter indispensable de la participación de la sociedad civil para alcanzar los ODS. Con esta lógica, los países más democráticos han creado dispositivos que otorgan a los representantes de la sociedad civil un papel importante. En ciertos casos, se invita a la sociedad civil a colaborar en la reflexión y en la acción sobre un ODS o una de sus metas. En otros, la sociedad civil contribuye a la gobernanza global de la Agenda 2030, en cooperación con las autoridades políticas. La gobernanza colaborativa pretende no dejar a nadie atrás («no one behind»). Es una garantía de eficacia y de implicación ciudadana.

La firma en 2018 del Acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales dotó a América Latina de herramientas innovadoras y pioneras que permiten a los ciudadanos ejercer su vigilancia en materia de desarrollo sostenible.

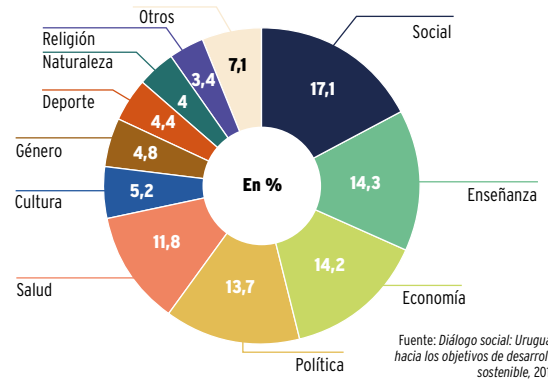
El diálogo social en Uruguay

Lanzada en noviembre de 2015 por el presidente uruguayo Tabaré Vázquez (Frente Amplio, coalición de partidos de izquierda), la iniciativa «Diálogo Social: Uruguay hacia el futuro» tenía como objetivo estimular una reflexión común en tres ámbitos: desarrollo e inserción internacional, protección social y políticas transversales. Durante dos años, los 632 organismos participantes dialogaron con el Gobierno y organizaciones internacionales. Junto con entidades de la sociedad civil, la patronal, los sindicatos y el mundo académico, estuvieron detrás de 210 propuestas. Tal movilización no es algo raro en Uruguay, ya que el diálogo social en este país forma parte de una larga tradición de concertación en la elaboración de políticas públicas. Los medios sociales, médicos y académicos, así como las empresas privadas están especialmente apegados a estas prácticas participativas con el ánimo de defender el Estado de bienestar

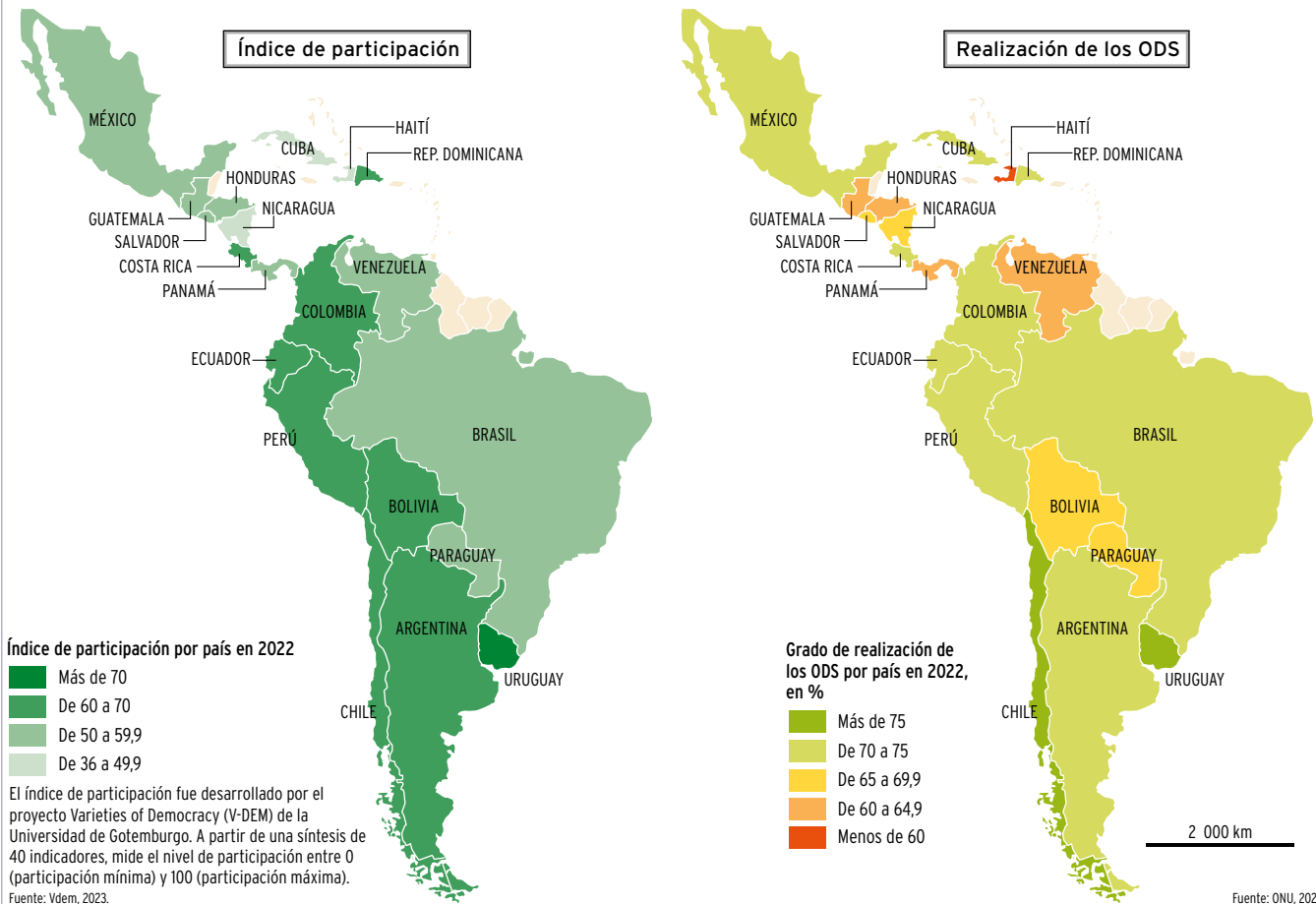
“ El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados ”
(DECLARACIÓN DE RÍO DE JANEIRO, 1992)

uruguayo. Una vez fijadas las grandes orientaciones, el diálogo social ha decaído un poco, debido a la llegada al poder en 2019 de un presidente con orientaciones políticas contrarias a la gobernanza participativa y a la pandemia de Covid-19 en 2020. Aun así, Uruguay sigue siendo el segundo país de América Latina más avanzado en la implementación de los ODS, detrás de Chile. El país ya ha alcanzado las metas correspondientes a los objetivos de lucha contra la pobreza (ODS 1), de educación (ODS 4), de agua y saneamiento (ODS 6), de energías limpias (ODS 7) y de ciudades sostenibles (ODS 11).

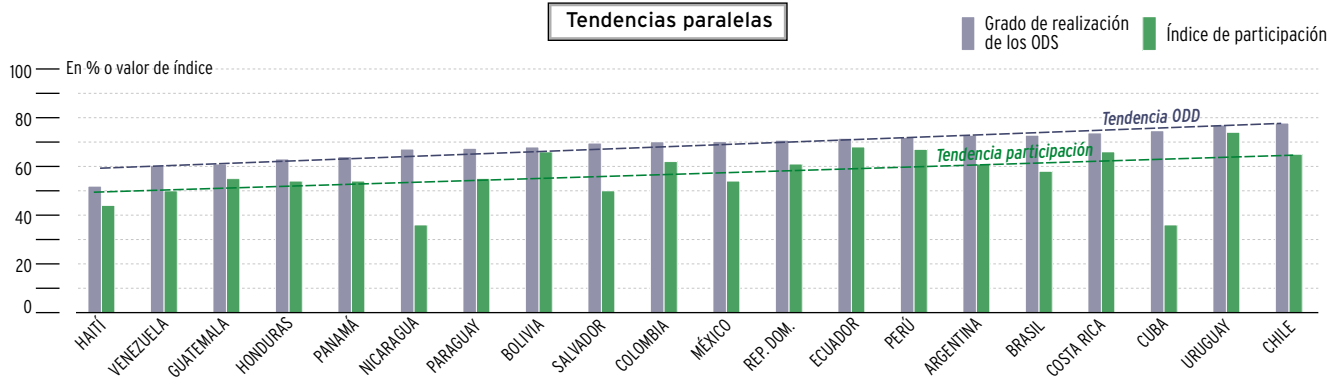
Ámbitos de actividad de los participantes en el diálogo social en Uruguay



Los ODS y la democracia en América Latina



Tendencias paralelas



BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía general

Sitio web de la CEPAL: www.cepal.org/
Plataforma regional de conocimientos de la CEPAL: <https://agenda2030lac.org/es>
Fichas y vídeos sobre el estado de avance de los 17 ODS de la CEPAL (2019): www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods
CEPAL (2022), *Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022: la transformación de la educación como base para el desarrollo sostenible*, Santiago, CEPAL.
Sitio web de la FAO: www.fao.org/
Sitio web y bases de datos de la Unesco: www.unesco.org/fr
Sitio web y bases de datos del Banco Mundial: www.banquemondiale.org
Portal de las páginas y de las bases de datos dedicadas a los ODS en el sitio web de la ONU: <https://unstats.un.org/sdgs/dataportal>

Bibliografía por cada ODS

ODS 1

Entrevista con Rayne Ferretti Moraes, ONU-Hábitat Brasil (2019).
Entrevista con Luis Valverde, IPP (2019).
Sitio web del programa «Territorios sociales»: <https://territoriosociais-pcrj.hub.arcgis.com/pages/resultados>.
Servières L. (2022), «L'internationalisation de la question des bidonvilles et ses effets sur l'action publique, en Colombie et au Brésil», tesis de doctorado en relaciones internacionales, Sciences Po/Universidad del Estado de Río de Janeiro.

ODS 2

Entrevista con Olve Antonio Carbonel Berrio, ASOPROSOAP (2023).
Entrevista colectiva con Patricia Melendez, Camilo Romero, Mauricio Torres y Darío Alvarado Bonet, ONUDC Colombia (2023).
Página web de la cooperativa Agroincolsa SAS: www.sachainchiputumayo.com/
Página web de ONUDC Colombia: www.unodc.org/colombia/index.html
Datos internos de programa, ONUDC Colombia, 2023.

ODS 3

Dongo D. (2020), «México, protección de menores de edad frente a la comida chatarra. Las prohibiciones se activan», Great Italian Food Trade, www.greatitalianfoodtrade.it
Figueroa-Lara A. (2013), «Exposé de position sur les arguments économiques en faveur d'interventions intersectorielles visant à renforcer les déterminants sociaux de la santé: Mexique», Documento de trabajo n° 7 — Les déterminants sociaux de la santé (politiques et pratiques), Genève, OMS.
Luong J. (2016), «Alimentation saine, du Mexique à la Belgique», *Éducation santé*, <https://educationsante.be/>
OCDE (2017), «Panorama de la Salud 2017. Indicadores de la OCDE», www.oecd.org/
OCDE (2019), *The Heavy Burden of Obesity. The Economics of Prevention*, Mexico, OECD Health Policy Studies.
Sodexo Institute for Quality of Life (2018), «The social and economic costs of obesity in Latin America: a call to action», 2018, <https://cl.sodexo.com/>

ODS 4

Entrevista con Emilio Jayon, alcalde de Santa Fe (2023).
Sitio web de la municipalidad de Santa Fe, actualidad y prensa: <https://santafenoticias.gob.ar/>
Sitio web del Campus educativo lanzado por el Ministerio de Educación de Argentina: <https://campuseducativo.santafe.edu.ar/recursos-pedagogicos/>
UNESCO global dataset on the duration of school closures (2022): <https://en.unesco.org/>

ODS 5

Aportaciones de Carina Lupica, Flor Rodriguez y Rhina Fortuna, BID (2023).
Base de datos de la OIT: <https://ilostat.ilo.org/data/>
Página web del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL: <https://oig.cepal.org/es>
Informes internos de seguimiento de la ejecución de IPG en la República Dominicana: BID, AFD (2022).
Informes internos de seguimiento de la ejecución del conjunto de IPG: BID (2023).
Núñez S. (2020), *Factores diferenciales de género en la pandemia covid-19. Análisis y*

recomendaciones para el sector público y privado de la República Dominicana, IPG República Dominicana, BID, AFD, FEM, <https://iniciativaparidadgenerord.gob.do/>

ODS 6

Entrevista con Emilie Dupuits, Universidad San Francisco de Quito (2023).
Sitio web del Colectivo de Geografía Crítica de Ecuador: <https://geografiacriticaecuador.org/>
Sitio web del Jardín botánico de Missouri: www.mobot.org/mobot/paramo_eco/localities.aspx
Dupuits E., Puertas C. y Guadamud J. A. (2023), «Resistencia, negociación y cocreación de saberes para la construcción del Fondo Plurinacional del Agua en el territorio Kayambi», *Allpanchis*, 50 (91), pp. 45-79.
Luteyn J. (dir.) (1999), «Páramos: A Checklist of Plant Diversity, Geographical Distribution, and Botanical Literature», Nueva York, The New York Botanical Garden Press.

ODS 7

Sitio web de la base de datos The Wind Power: www.thewindpower.net/
Sitio web de Carbonbay: www.carbonbay.com/ (página dedicada al proyecto: Los Santos -Energía eólica - Carbonbay)
Sitio web de Coopesantos: www.coopesantos.com/

ODS 8

Entrevista con Carlos Mermoz, Coprofam (2023).
Sitio web de Coprofam: <https://coprofam.org/>
Datos internos de programa, Coprofam (2023).
CEPAL, OIT (2022), «Dinámica de la productividad laboral en América Latina», *Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe*, 27 (LC/TS.2022/213), Santiago.

ODS 9

Mapa interactivo de las estaciones de BikeSantiago: <https://bikesharemap.com/santiago/#/12/-70.6312/-33.4298/>
Arellano Yévenes C. y Saavedra Peláez E (2017), «El uso de la bicicleta en Santiago de Chile ¿es una opción?», *EchoGéo* [en línea], 40.
Gillot M. y Rérat P. (2022), «The Plurinational Cycling Revolution in Santiago de Chile: Demands for mobility justice», *Applied Mobilities*.
Gobierno regional metropolitano de Santiago (2021), «Actualización y evaluación social del Plan maestro de ciclovías del Gran Santiago»,

Espacio de Comunicación Ciudadana, 1, <https://www.gobiernosantiago.cl>

Mora R., Truffello R. y Oyarzún G. (2021), «Equity and accessibility of cycling infrastructure: an analysis of Santiago de Chile», *Journal of Transport Geography*, 91, 102964.

Rivas M. E., Suárez-Alemán A. y Serebrisky T. (2019), «Políticas de transporte urbano en América Latina y el Caribe», BID, <https://publications.iadb.org/es/politicas-de-transporte-urbano-en-america-latina-y-el-caribe-donde-estamos-como-llegamos-aqui-y>

ODS 10

Sitio web de la plataforma R4V: www.r4v.info/
es/ecuador (página dedicada al GISE: www.r4v.info/es/ecuador/integracion_socioeconomica)

Sitio web de ACNUR: www.unhcr.org/

Sitio web de la Fundación Haciendo Panas: www.haciendopanas.org/inicio/

ODS 11

Datos internos de Multipro.

Sitio web de Urbamonde: www.urbamonde.org/

Sitio web de World Habitat: <https://world-habitat.org/>

Entrevista colectiva con Jorge Fley, Multipro y Suzanne Lerch, Urbamonde (2023).

Entrevista con Nina Quintas, Urbamonde (2023). Building and Social Housing Foundation (2014), «South-South Cooperation: transfer of the FUCVAM model of mutual aid housing cooperatives – peer exchange report», Coalville (Reino Unido).

Pompeu Quintas N. (2020), «Earth architecture in Uruguayan mutual-aid housing cooperatives – Assessing barriers and perceptions among the main urban actors in Uruguay», tesis de máster en ciencias de la innovación, desarrollo humano y sostenibilidad (IHDS), Universidad de Ginebra.

ODS 12

Datos del Global Footprint Network: <https://data.footprintnetwork.org/#/>

Sitio web de Origenes Brasil: www.origensbrasil.org.br/

Sitio web de Imáflora: <http://imaflora.org/>

Sitio web del Fondo Amazonia: www.fundoamazonia.gov.br/pt/home/

Informe anual de Origenes Brasil (2022): <https://origensbrasil.org.br>

ODS 13

Sitio web del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba: www.citma.gob.cu/

FAO (2022), «Proyecto IRES avanza en la rehabilitación de paisajes productivos en municipios vulnerables al cambio climático en Cuba», www.fao.org

FAO (2023), «La FAO y el Fondo Verde para el Clima impulsan la acción por el clima en los pequeños Estados insulares en desarrollo», www.fao.org

Lama Gómez E. y Martí J. (2012), «La naturaleza y los bosques en Cuba», DELOS: *Desarrollo Local Sostenible*, 5 (14), www.eumed.net/rev/delos/14
Red Internacional de Bosques Modelo (2016), «Gestion du marabou, une plante envahissante, présente à Cuba : comment tirer le meilleur parti d'une mauvaise situation», <https://rifm.net>

ODS 14

Sitio web de Protected Planet: www.protectedplanet.net/

Sitio web de Oceana: <https://oceana.org/>

Site web del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Aichi: www.cbd.int/

Spolarich G. (2023), «Chile creates a new marine protected area in Pisagua Bay following Four Oceana Expeditions», Santiago, Oceana.

Tambutti M. y Gómez J. J. (2022), «Panorama de los océanos, los mares y los recursos marinos en América Latina y el Caribe: conservación, desarrollo sostenible y mitigación del cambio climático», Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/167/Rev.1), Santiago, CEPAL.

ODS 15

Sitio web de Conservación Internacional Bolivia: www.conservation.org/bolivia/

Sitio web y base de datos de Global Forest Watch: www.globalforestwatch.org/

Sitio web y base de datos del Global land analysis and discovery sobre la evolución de los bosques a nivel mundial: <https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change>

Sitio web y base de datos de la Red Amazónica de Información SocioAmbiental Georreferenciada (RAISG): www.raisg.org/es/
Peharanda A. (2023), «Naturaleza 'blindada': Nace una nueva área protegida en Alto Beni», *La Razón*, 12 de febrero.

ODS 16

Sitio web de la CEV: <http://comisiondelaverdad.co/>

CEV (2022), «Rendición de cuentas», Bogotá (Power point y vídeo de retransmisión del evento).

CEV (2022), «Hay futuro si hay verdad. Informe Final», Bogotá, www.comisiondelaverdad.co/hay-futuro-si-hay-verdad

SIVJRN (2019), «Cartilla sobre Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición», Bogotá.

ODS 17

Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (llamado «Acuerdo de Escazú») (marzo de 2018), ONU.
Foro de los países de América latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible (2022), «Una década de acción para un cambio de época». (2022), Quinto informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, CEPAL.

Glass L. M. y Newig J. (2019), «Governance for achieving the sustainable development goals: how important are participation, policy coherence, reflexivity, adaptation and democratic institutions», *Earth System Governance*, 2, 100031.

OCDE (2020), «Social dialogue in the 2030 agenda», www.theglobaldeal.com
Uruguay, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Ministerio de Desarrollo Social (2017), «Diálogo social: Uruguay hacia los objetivos de desarrollo sostenible», www.opp.gub.uy

ONU (2022), «Sustainable Development Report. 2022 Rankings», <https://dashboards.sdgindex.org/rankings>

RIMISP-SEI (2017), «Implementation of the 2030 agenda in Latin America», www.sei.org

TUDCN-RSCD (2016), «Diálogo social para el desarrollo sostenible en Uruguay, Ghana e Indonesia», www.ituc-csi.org

V-Dem Institute (2022), «Democracy Report 2022. Autocratization Changing Nature?», Universidad de Gotemburgo.

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO

Olivier Dabène es profesor universitario de ciencias políticas en Sciences Po Paris desde el 2005, investigador en el Centre de Recherches Internationales (CERI) de Sciences Po, presidente de Opalc y profesor invitado en numerosas universidades de Europa, América del Norte y América Latina. Es autor, entre otros, del: *Atlas de l'Amérique latine* (Autrement), *Atlas du Brésil* (Autrement), *L'Amérique latine à l'époque contemporaine* (Armand Colin), *La Gauche en Amérique latine* (Presses de Sciences Po).

Laurie Servières trabaja como consultora en temáticas urbanas (barrios precarios) y de desarrollo sostenible. Tiene un doctorado en Relaciones Internacionales, realizado entre Sciences Po y la Universidad estatal de Río de Janeiro, con una tesis defendida en 2022 sobre «la internacionalización de la cuestión de los barrios de chabolas y sus efectos en la acción pública en Colombia y en Brasil». Es investigadora asociada al grupo Cities Are Back in Town y CERI-Sciences Po. Sitio web: www.linkedin.com/in/laurie-servi%C3%A8res-62643b101/

Aurélié Boissière es geógrafa cartógrafa autónoma especializada en la edición, la prensa y la comunicación. Tiene una licenciatura en geografía y un diploma de estudios superiores especializados (DESS) en Cartografía y SIG codirigido por la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne y la Escuela nacional de ciencias geográficas (ENSG). Colabora con regularidad con las ediciones Autrement donde ya ha realizado más de 25 atlas. También produjo los mapas de las colecciones «Histoire de France» (13 tomos) y «Mondes Anciens» (12 tomos, en curso) de las ediciones Belin. Además trabaja de forma puntual con las ediciones Hatier, Gallimard, Passés composés, Dunod, Tallandier, IFRI, EFEO, etc., y contribuye en el periódico *Courrier International*. Desde el 2006, enseña cartografía en el segundo año de licenciatura en la Université Paris 1. Sitio web: <https://boiteacartes.fr>

Véronique Rossi es directora artística autónoma, trabaja como grafista desde hace más de treinta y cinco años. Tras sus inicios en la prensa, se especializó en la edición acumulando experiencias con grandes figuras del grafismo como Peter Knapp. Desde hace más de veinte años colabora con regularidad con las ediciones Belin, para quienes realiza la concepción de maquetas, ya sea para libros de arte (*Céline, Mars, Le chêne...*) como para libros escolares. También realiza catálogos de ventas, logotipos, diseños de identidades visuales e identidades gráficas. Sitio web: <https://rossiancellin.wixsite.com/monsie>

Colombe Camus tiene el diploma de ciencias políticas/relaciones internacionales. Trabaja como editora, secretaria de redacción y correctora-relectora autónoma desde hace dieciocho años. Está especializada en la edición científica en ciencias humanas y sociales, y colabora desde hace muchos años con CERI-Sciences Po y Opalc, así como con diversas editoriales, revistas científicas, ONG y laboratorios de investigaciones. Sitio web: www.linkedin.com/in/colombe-camus-62377471/

AGRADECIMIENTOS

Este atlas es el fruto de un trabajo en equipo. Su realización no habría sido posible sin las contribuciones de Aurélie Boissière (cartógrafa), Colombe Camus (editora) y Véronique Rossi (diseñadora gráfica). Desde la fase de concepción, se benefició de las valiosas orientaciones de Carlos Maldonado, experto de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. También se benefició del apoyo de Sciences Po, a través de su Centro de investigaciones internacionales (CERI) y, en particular, del Observatorio político de América Latina y el Caribe (Opalc), así como del apoyo de Basma Daouadi. Por último, se realizó con una estrecha colaboración con el campus de Sciences Po Poitiers, donde un grupo de estudiantes contribuyó a la investigación y a la concepción de ciertas páginas dobles de ODS. Por su implicación y las ideas novedosas que aportaron al proyecto, damos las gracias a:

Camille Billard, Valentina Bruno, Mariana Cacace, Carla Cruz Bonilla, Camille Decout, Axelle Duvivier, Louison Furedi, Noémie Gallier, Elise Gay, Marie Lacombe, Aglaee Lamour Loubieres, Jean Laurens Louis, Victoria Noireau, Romane Penault, Gabriela Peña Mancero y Ronan Potel.

Para algunos de los ODS, también tuvimos la oportunidad de intercambiar con protagonistas o socios claves de las iniciativas seleccionadas. Su amabilidad y su disponibilidad transformaron la fase de recogida de datos en una hermosa aventura humana –a pesar de haber varias zonas horarias de diferencia. Le damos las gracias a:

Rayne Ferretti Moraes de ONU-Hábitat Brasil; Luis Valverde del IPP; Olver Antonio Carbonel Berrio, presidente de ASOPROSAOP; Patricia Melendez, Camilo Romero, Mauricio Torres y Darío Alvarado Bonet de ONUDC Colombia; Emilio Jayon, alcalde de Santa Fe; Emilie Dupuits, investigadora en la universidad de San Francisco de Quito; Carlos Mermoz, de la COPROFAM; Jorge Fley, de MultiPro; Suzanne Lerch, Nina Quintas y Pierre Arnold de Urbamonde; Carina Lupica, Flor Rodriguez y Rhina Fortuna del BID.

Patrocinadora de este atlas, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) le ha prestado una atención continua durante toda su elaboración. Agradecemos a Meghann Puloc'h su confianza y su valioso acompañamiento en los primeros meses del proyecto, así como a Oksana Malhéné, quien tomó con éxito el relevo. Gracias a las diversas personas dentro de la institución que han mostrado interés por el proyecto y que lo han enriquecido con sus ideas y sus buenos consejos, a Ibtissam Qaddi por los aspectos editoriales y a Benjamin Couderc del departamento de Trois Océans. Por último, gracias a Marie-Pierre Bourzai, directora del departamento de América Latina, por su atento seguimiento y por haber hecho posible esta aventura.

ACRÓNIMOS Y SIGLAS

ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
AFD: *Agence Française de Développement*, Agencia Francesa de Desarrollo
AMRU: Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay
ASOPROSAOP: Asociación de productores de sacha inchi del municipio de Puerto Caicedo, Putumayo
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
BNDES: Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social
CCP: Confederación Campesina del Perú
CDB: Convenio sobre la Diversidad Biológica
Cecovi: Central de Cooperativas de Vivienda
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CEV: Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición
CIOEC: Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas
CNFR: Comisión Nacional de Fomento Rural.
COICA: Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
CONTAG: Confederación Nacional de los agricultores familiares rurales
(*Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares*)
COPROFAM: Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur Ampliado
FAA: Federación Agraria Argentina
FAO: Organización para la alimentación y la agricultura
FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo
FEM: Foro Económico Mundial
FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FUCVAM: Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua
GEI: Gases de Efecto Invernadero
GGGI: *Global Gender Gap Index* (Índice Global de Brecha de Género)
GISE: Grupo de Trabajo de Integración Social y Económica
IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
IMC: Índice de Masa Corporal
IPG: Iniciativas de Paridad de Género
IPP: Instituto Pereira Passos
IREs: Incremento de la resiliencia climática de los hogares y comunidades rurales a través de la rehabilitación de paisajes productivos en localidades seleccionadas de la República de Cuba (*Increased climate resilience of rural households and communities through the rehabilitation of production landscapes in selected localities of the Republic of Cuba*)
KOICA: Agencia coreana de desarrollo internacional (*Korea International Cooperation Agency*)
Mercosur: Mercado Común del Sur
MUCECH: Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile
OCDE: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
OIM: Organización Internacional para las Migraciones
OIT: Organización Internacional del Trabajo
OMS: Organización Mundial de la Salud
ONAC: Organización Nacional Campesina
ONU: Organización de las Naciones Unidas
ONUDC: Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito
R4V: Respuesta regional de coordinación para los refugiados y los migrantes venezolanos
(*Regional response for venezuelan refugees and migrants*)
RAISG: Red Amazónica de Información SocioAmbiental Georreferenciada
SIVJRN: Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición
TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UAN: Unión Agrícola Nacional
UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
WWF: Fondo mundial para la naturaleza (*World Wide Fund for Nature*)

ATLAS

América Latina y el Caribe

En septiembre de 2015, la adopción de la Agenda 2030, programa de desarrollo sostenible común para todos los Estados miembros de la ONU, representó una formidable oportunidad para avanzar hacia la construcción de sociedades más justas, igualitarias y sostenibles. En la región de América Latina y el Caribe, la implementación de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha constituido un catalizador para el progreso, aunque se haya topado con desafíos considerables. La magnitud del problema de las desigualdades, combinado con las crisis políticas, económicas y ambientales que han afectado a algunos países y las dramáticas consecuencias de la pandemia de Covid-19 han provocado importantes retrasos en el cumplimiento de las metas y de los objetivos de este programa común. A diferencia de los análisis cuantitativos sobre el avance de la implementación de la Agenda 2030, esta obra adopta una perspectiva decididamente optimista, centrándose en valorizar los esfuerzos realizados por los actores latinoamericanos y caribeños desde 2015. Con la forma de un atlas que combina análisis y soportes gráficos y cartográficos, pone de relieve las ideas innovadoras y las buenas prácticas que han surgido a diversos niveles de gobernanza para contribuir al desarrollo sostenible. Las 17 páginas dobles que lo componen presentan contribuciones originales y prometedoras para el logro de los ODS en la región y más allá.

